



DIARI DE SESSIONS DE LA **COMISSIÓ DE SALUT** DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

DL PM 1095-2011

Fq.Con.núm. 33/27

XI legislatura

Any 2024

Núm. 22

Presidència
de la Sra. María José Verdú i Torres

Sessió celebrada dia 8 de maig de 2024

Lloc de celebració: Seu del Parlament

SUMARI

Compareixença RGE núm. 4085/24, sol·licitada pel Grup Parlamentari Socialista, pel procedimentn d'urgència, del director general del Servei de Salut de les Illes Balears, Sr. Javier Ureña i Morales (article 46.3), per tal d'informar sobre el desistiment del govern en relació amb l'expedient de reclamació a l'empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas, SL. (Acordada la compareixença a la sessió de la comissió de dia 17 d'abril del 2024). [222](#)

LA SRA. PRESIDENTA:

Bones tardes, senyores i senyors diputats i diputades. Començarem la sessió d'avui i, en primer lloc, els demanaria si es produeixen substitucions.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Sí, presidenta, bones tardes, Sebastià Sagreras substitueix Lourdes Cardona. Gràcies.

EL SR. PONS I PONS:

Sí, presidenta, Marc Pons substitueix Patricia Gómez.

EL SR. MATEO I HERNÁNDEZ:

Sí, José Luis Mateo substitueix a Rafael Nadal.

EL SR. APESTEGUIA I RIPOLL:

Sí, presidenta, Lluís Apesteguía substitueix Marta Carrió.

Compareixença RGE núm. 4085/24, sol·licitada pel Grup Parlamentari Socialista, pel procediment d'urgència, del director general del Servei de Salut de les Illes Balears, Sr. Javier Ureña i Morales (article 46.3), per tal d'informar sobre el desistiment del govern en relació amb l'expedient de reclamació a l'empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas, SL. (Acordada la compareixença a la sessió de la comissió de dia 17 d'abril del 2024).

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam a l'únic punt de l'ordre del dia d'avui, relatiu a la compareixença del Sr. Javier Ureña i Morales, director general del Servei de Salut, sol·licitada pel Grup Parlamentari Socialista, pel procediment d'urgència, mitjançant l'escrit RGE núm. 4085/24, i aprovada a la sessió de la comissió de dia 17 d'abril del 2024, per tal d'informar sobre el desistiment del Govern en relació amb l'expedient de reclamació a l'empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas, SL.

Compareix el Sr. Ureña, acompanyat per la Sra. Catalina Maria Reynés i Llobera, directora de Coordinació Administrativa; del Sr. Juan Carlos González i Otermin, sots-director de Comunicació i Coordinació; de la Sra. Margarita Bujosa i Pocoví, directora de Recursos Humans; del Sr. Raul Lara i Hernández, director d'Assistència Sanitària; del Sr. Rafael Marcote i Darriba, sots-director de Compres i Logística; del Sr. Iago Gómez i Pérez, director de Gestió i Pressuposts; i de la Sra. Alejandra Fernández i Morant, coordinadora del Gabinet de Comunicació. Siau tots molt benvinguts.

El desenvolupament de la sessió s'ajustarà a les regles establertes a la Resolució de la Presidència reguladora de les compareixences previstes als apartats 3r i 4t de l'article 46 del Reglament del Parlament.

Començam la compareixença i té la paraula el Sr. Javier Ureña, per tal de fer l'exposició oral, sense limitació de temps.

Sr. Ureña, cuando usted quiera.

EL SR. DIRECTOR GENERAL DEL SERVEI DE SALUT (Javier Ureña i Morales):

Buenas tardes y muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, señores y señoras diputados, y muchas gracias también al Grupo Parlamentario Socialista por la petición de comparecencia. Y, además, visto que piden informar sobre el desistimiento del Govern, pues la verdad que me congratula que por fin podamos hablar de desistimiento, y hayamos dejado hablar de la caducidad del expediente.

Para poder informar de ese desistimiento y atendiendo a la importancia que tiene el expediente, me van a permitir que haga un recorrido sobre todo del procedimiento, atendiendo, además, que sobre esta cuestión en concreto es la primera vez que comparezco en el Parlamento, y así podremos tener en cuenta todas las circunstancias que han tenido lugar y que nos han llevado, pues, a articular esas dos reclamaciones de las que hablaremos posteriormente. Y también teniendo en cuenta que es un expediente sensible y complejo.

Pero, para centrar la comparecencia, creo que hay que recordar cuál es el resumen del expediente, que, básicamente, es que cerca de 4 millones de euros invertidos en 1,5 millones de mascarillas, que no fueron lo que deberían haber sido, que nunca se utilizaron, y que hasta que no hubo un cambio de legislatura no se reclamaron. Y, además, parece ser, que, información importante, no se trasladó a la Dirección General de Fondos Europeos, a la Abogacía, a la Oficina anticorrupción, a la Intervención de la comunidad autónoma y a la UCO.

Entonces para iniciar el recorrido temporal del expediente, normalmente decimos que este expediente empieza un 25 de abril de 2020, y quiero recordar, porque es importante también, que ese día era sábado, y normalmente decimos que la primera referencia que tenemos de este expediente es un correo electrónico, que los grupos parlamentarios conocen, porque consta en el expediente y se les ha trasladado. Pero, como sabrán también, hay unos contactos previos, unas llamadas telefónicas, parece ser, y, si no, desmíentano, por favor, en los que se pone en contacto la empresa Soluciones de Gestión con el Govern de las Illes Balears. De hecho, en el trámite de alegaciones de la empresa, de noviembre de 2023, el representante de la empresa dice, y consta en el expediente: "Veamos, el 25 de abril de 2020, mi representada contactó telefónicamente con el entonces director de Gestión y Presupuestos del Servicio Balear de Salud, para ofrecer un 1.470.600 mascarillas chinas KN95".

Esta información, además, es coherente con el primer correo electrónico que conocemos, por el día del envío, porque es un sábado, porque ese correo se dirige a las dos cuentas de correo electrónico del que era director de Gestión y Presupuestos, a su dirección de correo electrónico corporativa y a su dirección de correo electrónico personal, con lo cual entendemos que alguien le había dado a la empresa esa información; por el trato, ya que, como sabrán, también empieza con un "Estimado"; por el ofrecimiento; y por la rapidez del reenvío también, porque este ofrecimiento llega un

sábado, al filo del mediodía, y apenas, en un corto espacio de tiempo, es reenviado a otros responsables del Servicio de Salud.

Y aquí hay que señalar que empiezan las primeras incógnitas del expediente, y no sé si nos las podrán resolver hoy: ¿Quién hizo esos primeros contactos? ¿Con qué personas del Govern de las Illes Balears hablaron los miembros de la empresa o las personas allegadas? Es una duda que todavía nadie ha resuelto. Y lo que sí que ha hecho este govern, y lo volveremos a hacer donde haga falta y cuando haga falta, es confirmar y asegurar que no ha habido absolutamente ningún contacto con la trama. Lo cual hace, como saben también, que la hipótesis de que la empresa presiona, de que la empresa da indicaciones o que se deja caducar el expediente, es totalmente inverosímil.

Y esta afirmación, además, la hacemos desde la tranquilidad de que cuando se conocen esas supuestas escuchas a la trama, en la que se apunta esta posibilidad, efectivamente la empresa, los miembros de la empresa, tienen las comunicaciones intervenidas. Con lo cual entendemos que si hubiese algún contacto con el Gobierno, se hubiese rastreado también y se hubiese concretado, y, evidentemente, ni ha sido así, ni va a ser así, porque no ha habido absolutamente ningún contacto.

Volviendo al correo electrónico mencionado, de 25 de abril, recuerdo, sábado, a las 16:25 de la tarde, se informa, por parte del representante de la empresa Soluciones de Gestión, su director de proyectos, que se remite la documentación de calidad del avión, que está llegando, el 26 de abril de 2020, a Barajas y podría ir destino a Baleares. Se indica la cantidad de mascarillas y una referencia de cada una de las mascarillas, y adjunta una serie de información de reporte de esas mascarillas.

Dicho correo electrónico, el director de Gestión y Presupuestos lo reenvía, a las 16:41 minutos, a la directora de Coordinación Administrativa y al subdirector de Compras y Logística, ambos del Servicio de Salud.

El mismo día, a las 17:00 horas, el subdirector de Compras remite el correo a una funcionaria de la Central de Compras, pidiéndole opinión sobre estas mascarillas que se les están ofreciendo. Y, como saben, la funcionaria contesta a las 18:23: “Yo lo que veo es que cumple normativa China del CNAS, ellos cumplen la GB 2626, hacen una declaración de conformidad, sin número de organismo notificado, utilizan el FM italiano, y ahora miro si está autorizado, ya que no pone número. Eso sería lo único, el resto es igual que las que hemos comprado hasta ahora y, como siempre, si no tenemos nada más, tendremos que comprar”.

El 25 de abril, a las 8.15 pm, vía correo electrónico, el subdirector de Compras y Logística presenta los contactos respectivos de las empresas Soluciones de Gestión y Lantimar, que iba a ser la empresa que se iba a encargar del trámite aduanero, para que se coordinen para la entrega del material.

El 25 de abril, a las 10.00 Pm, un miembro de la empresa, Íñigo Rotaetxe, remite correo al subdirector de Compras, con la factura proforma del envío, solicitándole que “Si está todo conforme, por favor, envíanos la aceptación con certificado

digital o respondiendo al correo positivamente, y ya se firmará mañana”. En dicha factura proforma se detalla, entre otras, la siguiente información: “Suministro urgente de material gastable para la alarma sanitaria provocada por el virus COVID-19; descripción, mascarilla protectora KN95, FFP2, unidad según ficha técnica anexa, en el plazo de entrega de 48 horas. Cantidad total: 1.480.600. Precio unitario: 2,50. Precio total: 3.701.500 euros”. Ficha técnica, con los ítems de los productos y la empresa.

Con lo cual, como se puede observar, la compra se cierra durante un sábado, y esto lo digo porque también se ha apuntado a que era una decisión técnica, o que la habían tomado los funcionarios.

El 26 de abril de 2020, se emite factura comercial a nombre de Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas, SL, con los mismos datos de la factura proforma, por un importe de 3.701.500 euros y descripción del producto o similar. Revisada la ficha técnica, se define el producto y las características principales.

El 28 abril de 2020, se valoran por la Subdirección de Compras y Logística, mediante cruce de correos entre el subdirector de Compras y un jefe de servicio, las características de las mascarillas, y se comunica de forma interna que el uso de las mismas no es hospitalario. Y una de las circunstancias a las que se hace referencia es que el pedido original lo hizo otra administración pública. Yo no sé si nos pueden dar tampoco más información al respecto, pero entendemos que nadie se planteó por qué no se había concretado ese pedido de esa otra administración pública, pero no tenemos más información al respecto. Sí que es verdad que, posteriormente, a través de medios, se ha apuntado a que eran otras comunidades autónomas las que habían rechazado este pedido, pero no tenemos constancia oficial.

Y vuelvo, y me quiero detener un momento en el uso pretendido de las mascarillas, porque, como saben, para la compra de este material se utiliza una tramitación de emergencia que, de acuerdo con el artículo 120 de la ley, determina que se habilita este procedimiento para una inmediata actuación. Y ya no es que la actuación fuese inmediata o no fuese inmediata, es que, como sabemos, esas mascarillas nunca se utilizaron. En todo caso, lo que sí que hay que tener en cuenta, es que en aquel momento no había una desescalada prevista en algún momento concreto, y si la actuación, que tenía que ser inmediata, ese uso, en principio, solo podía ser hospitalario. Entonces, lo que tampoco se entiende, y es un nuevo interrogante en el expediente, es por qué se codifica el material como uso domiciliario. Y además hay que apuntar que es la única vez que se ha utilizado esta codificación para unas mascarillas concretas, y, además, que, como saben, nunca se llegaron a utilizar.

A tal efecto, también cabe recordar las prescripciones de la Ley 9/2017, de contratos del sector público, que, en su artículo 28, cuando regula la necesidad y la idoneidad de los contratos y la eficiencia en la contratación, establece que la idoneidad de un contrato y la justificación que tiene, deben ser determinadas con precisión, dejando constancia de ello en la documentación preparatoria, antes de iniciar el procedimiento encaminado a su

adjudicación. Y en este caso que nos ocupa, veremos como las necesidades que se pretenden cubrir con estas mascarillas, el famoso uso hospitalario o uso domiciliario, va cambiando dependiendo del momento en el que se tenga que determinar esta necesidad pretendida.

En la misma fecha, 28 abril de 2020, se solicita, por parte del jefe de servicio de la Central de Compras, la codificación en el sistema de las mascarillas, con un código distinto a las mascarillas FFP2 estándar, y cito textualmente: “Necesitamos un código SAP para una compra que hemos hecho, para uso ciudadano, no intrahospitalario. La descripción podría ser algo así como mascarillas FFP2, KN95, uso extrahospitalario. Al final se trata de tenerlas diferenciadas de las FFP2 estándar”. Y aquí parece que se concreta el cambio repentino del uso de las mascarillas, que no será el único.

El 21 de abril de 2020 se hace constar en la aplicación SAP, que es la aplicación del programa informático que tenemos en el Servicio de Salud, entre otras cosas, para el inventario del material, los datos del pedido: proveedor, Soluciones de Gestión y Apoyo, material 118618, mascarilla de protección oficial FFP2 facial, KN95, de uso domiciliario, cantidad: 1.460.600. Base imponible: 2,50 euros. Total. 3.701.500.

El 30 de abril de 2020, se registra la factura conformada, emitida por Soluciones de Gestión y Apoyo, por el mismo importe y concepto.

El 4 de mayo de 2020, se procede a generar el documentado, ya saben, autorización, disposición y orden de pago, a cargo de una partida presupuestaria para que, a través de la aplicación SAP y en Tesorería, pues, se habilite este pago.

El 4 de mayo de 2020, se emite informe del subdirector de Compras y Logística, mediante el cual se solicita al órgano de contratación -recuerden, el director general- la declaración de la tramitación de emergencia prevista en el artículo 120 de la Ley de contratos del sector público, para la adquisición de mascarillas de protección FFP2 de un solo uso, solicitado a la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas, SL. En dicho informe se justifica que -y cito textualmente-: “El Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social va actualizando el procedimiento de actuación del COVID-19 ante la falta de recursos disponibles. En este sentido, contempla indicaciones ante un escenario de tramitación comunitaria y prioriza la utilización de este material básico, de manera que los profesionales y las personas expuestas -y aquí cita un documento concreto, también entrecomillado, ‘deben llevar un equipo de protección individual para la prevención de infección por microorganismos, transmitidos por gotas y por contacto que incluirán batas, mascarilla quirúrgica o FFP’ -cierro comillas-, guantes y protección ocular”. Además, se puntualiza que “los pacientes -y remarco la palabra “pacientes” por lo de uso hospitalario o extrahospitalario- con infección respiratoria aguda deberán separarse de otros pacientes. Se les pondrá una mascarilla quirúrgica y serán trasladados a una zona habilitada para su manejo. El personal que los acompañe -personal, entendemos que se refieren a profesionales- llevará mascarilla quirúrgica. Por otra parte, en los casos de procedimiento de actuación que generen aerosoles, se estipula como medida de seguridad, una mascarilla autofiltrante FFP2 o FFP3”.

El fragmento entrecomillado -y lo pueden buscar en Google- se corresponde con una parte del documento técnico *Manejo en urgencias del COVID-19*. Efectivamente, el Ministerio de Sanidad que pretende ofrecer pautas para el manejo de los pacientes de COVID-19 en las urgencias de los centros sanitarios.

Con lo cual, a la luz de toda esta información, parece que formalmente en el documento que importa, que es el informe necesidad, la finalidad pretendida, el uso que se le pretende dar a estas mascarillas es uso hospitalario.

Sigue el documento y dice: “La empresa Soluciones de Gestión y Apoyo, con CIF B50760123, se encuentra en disposición de poder servir el 1.480.600 mascarillas de protección para vapores orgánicos FFP2 de un solo uso, por un importe de 3.701.500 euros, que se tramitan con el siguiente número de pedido: 4501707751. La ejecución del contrato de entrega de suministros se estipula que será antes de quince días, desde la tramitación de los pedidos mencionados”.

Se trata de una tramitación excepcional y limitada al acontecimiento calificado de emergencia, se trata de una situación real que justifica -cito textualmente- “ante un grave peligro, una actuación inmediata de la administración”. Esta emergencia se circunscribe solo a la prestación concreta de este pedido.

El mismo 4 de mayo se dicta resolución por el órgano de contratación del Servicio de Salud, el director general, en virtud de la cual se acuerda la emergencia y la tramitación del procedimiento de emergencia, la compra del material de protección individual a varias empresas, entre ellas a Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas, SL, y sobre esta empresa dice: “Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas ha contactado con el servicio para avisar que habían fletado un avión repleto de mascarillas FFP2. En este servicio está el transporte de este material hasta Palma, una vez revisada la documentación técnica y revisado el precio. Mascarillas FFP2, 1, de protección para vapores orgánicos, mascarillas FFP2 de un solo uso, importe total: 3.701.500 euros, incluido el vuelo”.

El 8 de mayo de 2020, se emite certificado por la secretaria del Consell de Govern, con el visto bueno de la presidenta del Govern, en virtud del cual se adopta el acuerdo por el cual se dan por enterados de la contratación de emergencia del Servicio de Salud de las Illes Balears y de la *Conselleria de Salut i Consum davant la crisi sanitària de la COVID-19*: en relación con la adquisición realizada a la entidad Soluciones de Gestión y Apoyo a la Empresa, se indica que han adquirido un 1.480.600 mascarillas de protección FFP2, por un importe de 3.701.500 euros.

Consta en el tercer acuerdo “Mostrar la conformidad con las contrataciones mencionadas en el punto precedente, atendidas las circunstancias que las motivan, que constan en la parte expositiva”.

Se entiende que las deliberaciones del Consell de Govern son secretas, pero entiendo que, cuando se menciona este expediente, además de por la importancia que tenía, se da información también. Lo que no sé es si se habla, a lo mejor se

debería, del uso pretendido, y por eso el Consell de Govern se da por enterado de la tramitación de este contrato. No sé si alguien preguntó cuál era el uso pretendido, no sé si alguien preguntó si se habían codificado correctamente, no sé si alguien preguntó cuál era el uso al que estaban destinadas.

Asimismo, consta la documentación... la publicación de los anuncios de adjudicación en la plataforma de contratación del sector público, el día 12 de mayo de 2020: expediente SSCC EM 226/20; objeto del contrato: suministro material COVID-19, mascarillas FFP2; valor estimado: 3.701.500 euros; presupuesto base de licitación, el mismo; plazo de ejecución, un mes; adjudicatario, Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas; importe total ofertado: 3.701.500 euros; fecha del acuerdo, 8 de mayo.

El 18 de mayo de 2020, la empresa Soluciones de Gestión contacta de nuevo con el Servei de Salut ofreciendo unas nuevas mascarillas para un nuevo pedido. El ofrecimiento parte también de Íñigo Rotaache al director de Gestión y Presupuestos, a las 21:07, y este reenvía el correo al subdirector de Compras el día 19 de mayo de 2020, a las 9:20, con el siguiente mensaje: “Échales un vistazo por si nos interesan”.

El 19 de mayo de 2020, a las 10:46, el subdirector de Compras se comunica, vía *e-mail* y contesta al director de Gestión y Presupuestos, con carácter interno, que el Servei de Salut ya hizo un pedido inicial de 1,4 millones de mascarillas, y dice así el correo: “Hola, pone ‘*these product is no medical device*’ por lo que entiendo que sería para uso civil. Tenemos aún los 1,4 millones que le compramos a Íñigo del pedido inicial. Yo esperaré a ver cómo evoluciona la cosa en cuanto a salidas, tengo problemas de espacio”.

El 22 de mayo de 2020, se solicita por correo electrónico la recogida de un paquete de pequeñas dimensiones que contiene mascarillas y tiene como destino el Centro Nacional de Medios de Protección.

El 8 de junio de 2020, se emite informe por parte del Centro Nacional de Medios de Protección: “El resultado de las verificaciones referidas a mascarillas con motivo de la crisis sanitaria COVID-19, solicitado por el ib-salut, expediente 21611120, en virtud del cual se concluye: No cumplen FFP2 las siguientes mascarillas”. Y relaciona un grupo de mascarillas, las referencias del pedido.

Lo que se hace con este documento y con este informe lo desconocemos, porque sí que vuelve a aparecer al cabo de mucho tiempo, al cabo de años, pero parece que durante un determinado tiempo no se aporta cuando se envía la información de este expediente -como decía- a la Abogacía, a la Intervención, a la Oficina anticorrupción, a la Dirección General de Fondos Europeos, y por eso parece que se financia con fondos europeos, e incluso a la UCO, cuando pide toda la información referente a este expediente. Pero, sin embargo -como les decía-, vuelve a aparecer cuando el que era director de Gestión y Presupuestos, y ya era director general, en marzo de 2023 envía un oficio informativo a la empresa.

El 12 de agosto de 2020, el subdirector de Compras y Logística emite certificado de conformidad, como ya saben, dice el certificado: “Ha realizado suministros de manera satisfactoria durante el año 2020 por la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas, número de CPV 1814300-3, indumentaria de protección, por los siguientes importes: 3.701.500 euros”.

Aquí también..., si quieren nos detenemos posteriormente, pero lo que hay que reseñar es que un certificado de conformidad es un documento oficial y plenamente acreditativo, y lo que hace es dar certeza ante terceros de que este contrato se ha ejecutado correctamente. Y, al respecto, traigo a colación la definición del certificado del *Llibre d'Estil* de la CAIB que se refiere al certificado, en su segunda edición, diciembre de 2018, el prólogo es de la expresidenta del Govern, de esta edición: “El certificado es el documento con el que la persona titular de un órgano directivo, un empleado público o una persona autorizada acredita oficialmente y por escrito unos hechos”.

Posteriormente, durante los siguientes meses -y a no ser que ustedes quieran, no me detendré demasiado en ello- parece que informa sobre la compra pública de emergencia la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción de las Illes Balears; hay alegaciones por parte de la Abogacía de la comunidad autónoma; hay un informe definitivo por parte de la Oficina anticorrupción; se traslada el expediente para financiación de fondos europeos; hay un informe... hay algún tipo de análisis por parte de la Intervención de la CAIB; pero parece que a ninguno de estos organismos ni entidades se les traslada ese informe del Centro Nacional de Medios de Protección, que es el que dice que las mascarillas no son lo que deberían ser. Con lo cual parece que, de alguna u otra manera, estos análisis están viciados.

Durante el año 2021, lo que tenemos son correos electrónicos -como saben también- en los que se comunica, al subdirector de Compras y al jefe de servicio de la Subdirección de Compras, que las mascarillas caducan durante el año 2022, y hay varios de estos correos. Pero, pese a estos correos, parece que estas mascarillas..., bueno, parece no, en ningún momento se mueven de (...).

El 19 de julio de 2022, la UCO visita el Servicio de Salud. Se comunican, por parte de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, diligencias de investigación número 10/22, solicitando que se aporte copia de cuánta información obra en su poder en referencia al expediente SSCC EM 226/20, relativo a la adquisición de material sanitario de protección, del que fue adjudicataria la entidad Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas, SL.

El mismo 19 de julio de 2022, se levanta acta de entrega, en virtud de la cual se hace constar que se entrega la documentación que obra en su poder, relativo al expediente referido, en un *pendrive* a la Unidad Central Operativa Judicial de la Guardia Civil. Parece que solo se entregó la parte más formal del expediente administrativo de contratación y no se entregó ni la copia del certificado de correcta ejecución, ni copia del informe del Centro Nacional de Medios de

Protección, ni parece los correos previos a la formalización de la compra.

También algo de lo que se ha hablado, además, se ha dicho, si no recuerdo mal, y si no, discúlpenme, aquí, en sede parlamentaria, que el resto de consellers no tenían constancia de esta visita. No sé si alguien tampoco nos puede aclarar, por también tener claro hasta dónde llega la información y en qué momento, quien se guarda esta información, si es el director de Gestión y Presupuestos, que es el que lo recibe; si es el director general; si es la consellera; o dónde se queda la información.

Y lo que llama la atención, además de que no se comunicase esta especial circunstancia, es que posteriormente hay un periodo de nueve meses en los que no se tiene constancia de ninguna actuación. De hecho, hasta el 20 de marzo de 2023, no se tiene certeza de que se haga nada respecto a este pedido. Así, el 20 de marzo de 2023, según parece, el ya director general, que era el exdirector de Gestión y Presupuestos, remitió un anuncio de requerimiento a la empresa en el que se volvió a justificar el destino profesional sanitario de las mascarillas, de hecho, dice: “ante la necesidad de garantizar la protección del personal del Servicio de Salud”, y su no validez, anunciando que el Servicio de Salud de las Illes Balears comunica a la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas, SL, que, al haberse detectado que las mascarillas suministradas en el marco del contrato SSCC EM 226/20, suministro de material COVID-19, mascarillas FFP2, no cumplen con los requerimientos técnicos de una mascarilla FFP2, se procederá a tomar las medidas oportunas con el fin de resarcir al Servicio de Salud de las Illes Balears de la situación que ha ocasionado este hecho.

“Se procederá a tomar las medidas oportunas”, entendemos, creo que fácilmente, que esto no constituye una reclamación formal.

En documento fechado el 24 de marzo, y registrado electrónicamente, la empresa contesta, entre otras cosas: “Rechazamos por completo sus afirmaciones, ya que el suministro realizado fue mascarilla tipo KN95 y no FFP2”. Y de forma razonada, dicen que “Las mascarillas suministradas KN95 lo eran conforme a lo convenido por ambas partes y cumplían perfectamente con los requisitos administrativos aplicables”. Añadiendo, en nuestra opinión, es completamente extemporáneo e improcedente, que en el marco de una contratación de emergencia se nos comunique, casi tres años después, unos supuestos defectos de suministro realizado sobre la base de un análisis de mascarillas FFP2 que no fueron suministradas.

A estas alegaciones no contesta el Servicio de Salud en su momento.

El 6 de julio de 2023, el subdirector de Compras y Logística emite informe-propuesta de resolución parcial del contrato SSCC EM 226/20, en virtud del cual se expone, como antecedentes, que, mediante correo electrónico de fecha 25 de abril, la empresa Soluciones de Gestión ofreció un avión repleto de mascarillas KN95, 1.480.600, remitiendo documentación técnica el mismo 25 de abril. En el documento, además, como ya saben, se justifica una reclamación parcial en

base a una diferencia y relatan que “dicha diferencia estriba en que desde el inicio dichas mascarillas no estaban pensadas para distribuirse dentro del ámbito hospitalario, sino en el ámbito civil”.

Aquí volvemos a tener otro cambio. Es por ese motivo que se codificaron de forma distinta para tenerlas diferenciadas de la mascarilla FFP2, de uso hospitalario. Tal es así que dicha mercancía se almacena de las antiguas dependencias de Son Dureza, para poder distribuir las en cuanto y dónde se decidiese.

En dicho informe se analiza, por un lado, económicamente, la propuesta de resolución del contrato, valorándose en una reclamación de 2.626.584 euros, en tanto que se procede a analizar el precio medio de la mascarilla quirúrgica...

(Se sent una veu de fons intel·ligible)

... que... gracias. En dicho informe se analiza, por un lado, económicamente, la propuesta de resolución del contrato, valorándose la reclamación en 2.626.584 euros, en tanto que se procede a analizar el precio medio de la mascarilla quirúrgica, que en aquel momento era de 0,424 euros frente al precio unitario abonado de 2,50, es decir, una diferencia de 2,76 euros. Y, por otro lado, consideraciones jurídicas, estimando de aplicación, importante también, lo establecido en los artículos 211 a 213 de la Ley de Contratos del Sector Público, por defecto de calidad de las mascarillas.

Finalmente, concluye proponer la tramitación del procedimiento de resolución del contrato parcial, de conformidad con lo establecido en el artículo 213 de la ley, así como solicitar una indemnización a la empresa, por importe de los 2.626.000 euros.

El expediente consta de una serie de numerosos anexos y, pese a que es un informe-propuesta, es necesario dejar claro que en ningún caso este informe supone el inicio del procedimiento. De hecho, a tal efecto, el artículo 58 de la Ley 39/2015, de procedimiento administrativo, iniciación de oficio, establece que “Los procedimientos se iniciarán de oficio por acuerdo del órgano competente, bien por propia iniciativa o como consecuencia de orden superior, a petición razonada de otros órganos, o por denuncia”, y en este caso el órgano competente es el director general, no el subdirector de Compras. De hecho, el Decreto 39/2006, por el cual se aprueban los estatutos del ente público Servicio de Salud de las Illes Balears, dispone, en su artículo 12.1, que corresponde al director general del Servicio de Salud, entre otras funciones, actuar como órgano de contratación.

Los días 11 12 de julio, se producen los traspasos de poderes en la Conselleria de Salud y en el Servicio de Salud de las Illes Balears, en ninguna de las dos reuniones se menciona el expediente, ni ninguna circunstancia de las muchas que le afectan. De hecho, yo este documento lo estoy paseando bastante, es el documento que se nos entrega en el traspaso de poderes, está a disposición de quien quiera consultarlo, y en este expediente, en este documento, no hay absolutamente ninguna información sobre este expediente, que es algo que también se ha dicho.

El 24 de agosto de 2023, se dicta resolución por la que se acuerda iniciar el procedimiento de resolución parcial del contrato de emergencia de suministro de mascarillas FFP2, en virtud de lo establecido en los artículos 211 a 213 de la ley, y se acuerda reclamar los 2.626.000 euros. Se acuerda conceder el plazo para la presentación de alegaciones, solicitar informe jurídico, una vez recibidas las alegaciones, y solicitar dictamen al Consell Consultiu, en el caso de que exista oposición por parte del contratista.

Dicha resolución adolece de vicios, porque en el informe-propuesta hay información que no contiene, información importante, como que se había certificado de completa conformidad la ejecución de este expediente. Y, como también saben, y lo hemos reconocido abiertamente, dicha resolución contiene un error, ya que no consta como duración del procedimiento los ocho meses que establece el artículo 212.8 -acuérdense de los fundamentos que ya están recogidos en el informe de necesidad, fundamentos de derecho 211 a 213 artículos de la ley- el plazo que consta en el artículo 212.8 de la Ley de contratos, de ocho meses. Aunque es algo que no condiciona en nada el procedimiento y que hemos solventado posteriormente.

El 17 de octubre de 2023, se procede a notificar el trámite de audiencia a la empresa contratista, concediéndole un plazo de 10 días para la presentación de las alegaciones que se consideren oportunas.

El 20 de octubre de 2023, se amplía el plazo de presentación de alegaciones, y el mismo día se levanta diligencia en virtud de la cual se hace constar que el representante de la empresa ha comparecido en las dependencias del Servicio de Salud, ha accedido a las dependencias y se le ha dado acceso al expediente. También se ha hecho una auditoría interna sobre estos contactos que se ha limitado a personal funcionario, y el resultado de la auditoría -quiero dejarlo muy claro- es que todos los contactos de los funcionarios con la empresa se han limitado estrictamente al trámite de audiencia, que es un derecho que tiene la empresa dentro del procedimiento.

El 6 de noviembre de 2023, la empresa registra escrito de alegaciones a dicho trámite, junto con varios anexos. En dicho trámite, la entidad se opone a la resolución del contrato, alegando, en primer lugar, que, ante la escasez de EPI con marcado CE, se acordó por el Ministerio de Industria y el Instituto de Seguridad en el Trabajo la compra pública en marcado CE de mascarillas y EPI, siempre que cumpliesen las especificaciones dictadas por el Ministerio de Sanidad.

En segundo lugar, que, en tanto se acredita que estas mascarillas podían suministrarse por ser similares a las FFP2, consta la conformidad por parte del Servicio de Salud, en relación con el pedido, así como que era conocedora de que se trataban las mascarillas KN95, por lo que adjuntan documentación. En tercer lugar, y adjuntan evidentemente como documentación el certificado de conformidad del suministro, el documento famoso de 12 de agosto de 2020.

En tercer lugar, se hace constar la conformidad por parte del Servicio de Salud a la adquisición del material, según acta

de recepción y certificado de conformidad, emitido por el subdirector de Compras y Logística.

En cuarto lugar, se opone a la valoración realizada por el Centro Nacional de Medios de Protección, considerando que no es un organismo autorizado y que existe una inspección realizada y validada.

En quinto lugar, considera que se está haciendo una interpretación errónea en relación con la calificación de las mascarillas, pues, si bien son de uso hospitalario, el Servicio de Salud rechaza su uso como tal.

En sexto lugar, que no cabe equiparar las mascarillas KN95 como mascarillas quirúrgicas.

Y, en séptimo lugar, entiende que ha existido desviación de poder por parte de la administración al incoar un procedimiento de resolución de contrato parcial y la finalidad pretendida, justificando la misma, fundamentalmente, en que se dio conformidad a la recepción de la adquisición.

El día 21 de febrero, como también saben, se conoce una operación de la Audiencia Nacional en la que, según los medios de comunicación, se detiene a varios miembros de la empresa y su entorno. Al comprobar que la empresa había contratado con el ib-salut, se procede a hacer una auditoría del expediente, y se acuerda, una vez conocido que las mascarillas no cumplían los estándares requeridos, que se abran las vías necesarias para recuperar el montante total de la operación. Y en eso hemos trabajado, tanto en la vía administrativa, haciendo..., dictando una resolución de revisión de oficio para conseguir la nulidad del contrato, por un lado, y solicitando la personación en la vía penal, ya que, como también saben, si finalmente, como parece que a eso apunta la Audiencia Nacional, si finalmente se sentenciase que se trataba de una organización criminal, el contrato devendría nulo.

También hay que tener en cuenta que la reclamación inicial, como les comentaba, adolecía de importantes vicios ocultos, como que el contrato fue certificado de completa conformidad por parte del subdirector de Compras, algo que, como les decía, se obvia en el informe-propuesta. Que, al haber certificado de completa conformidad, la ejecución del contrato dificulta, evidentemente, enormemente la reclamación, y que, de prosperar, solo permitiría recuperar una parte del dinero de los ciudadanos. Un cálculo que, conocidas todas las circunstancias que afectan al expediente, parece que resulta totalmente insuficiente.

El día 21 de marzo se dicta resolución de desistimiento de la reclamación parcial por los tres motivos que se han comentado: que existe un certificado de conformidad que dificulta enormemente el éxito de la reclamación; que ni en el mejor de los casos hubiese permitido recuperar el montante total de la operación, solo una parte; y, especialmente, que del análisis del expediente se detectan vicios de nulidad, por lo que esa vía es la que se pretende atacar directamente. Si, como administración, detectamos que en el inicio del procedimiento administrativo hay un vicio de nulidad, nos vemos obligados a atacar ese vicio de nulidad, a explorarlo, porque, de ser efectivamente nulo todo el procedimiento, todo el resto de la

tramitación, digamos, ya no tendría, si me permiten la expresión, existencia a nivel administrativo.

Como les decía al principio, me alegra que ya podamos hablar abiertamente de desistimiento, porque, como les decía, aunque es cierto que en esta primera resolución había un error que se solventa posteriormente en esta resolución, el plazo con el que hemos trabajado en todo momento para la resolución de contratos es de ocho meses, tal y como determina el artículo 212.8 de la Ley de contratos del sector público.

Si quieren, podemos entrar más a debatir sobre el tema, pero evidentemente es un criterio técnico que emana del Departamento de Contratación del Servicio de Salud y que este director general, evidentemente, lo suscribe.

Es cierto que se han mencionado diversas..., bueno, una sentencia del Tribunal Constitucional de 2021, si no recuerdo mal, pero, con posterioridad a esa sentencia de 2021, la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, que, como saben ustedes, es el órgano consultivo que tenemos para la contratación administrativa, se ha seguido mostrando a favor de los ocho meses. Con lo cual entendemos que es el plazo que hay que aplicar.

De hecho, el día 23 de diciembre de 2022, la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, en contestación a las alegaciones de un contratista que defiende la caducidad de los tres meses, basándose en la sentencia del Tribunal Constitucional, la Junta Consultiva determina que, literalmente: “En conclusión, el plazo para resolver los contratos de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears es de ocho meses”.

En igual sentido, el acuerdo de la misma Comisión Permanente de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, de 30 de noviembre de 2023, en la que se reiteran los argumentos del anterior acuerdo, en contestación a la delegación primera del contratista, se define que: “*En conclusió, el termini per resoldre els contractes de la comunitat autònoma de les Illes Balears és de vuit mesos*”. Es un error de forma, que solventamos, que no afecta al procedimiento y que en nada supone la caducidad del expediente. De hecho, la hipótesis que se ha lanzado, sin ningún sentido, sobre la posible caducidad del expediente era, como decía antes, que la trama había contactado con el Servicio de Salud, y quiero volver a reafirmar una vez de manera muy clara, que no ha habido absolutamente ningún contacto con la trama y que ni siquiera hemos recibido absolutamente ninguna directriz ni ninguna orden sobre este expediente.

Por todo ello, de esta primera resolución se desiste, y hay una resolución de desistimiento. Yo, como funcionario, como jurídico, entiendo que no hay ningún debate al respecto, saben que el procedimiento administrativo es un procedimiento formal; pueden entender, desde su punto de vista, que debería haber caducado, pero la realidad es que ha finalizado el procedimiento con una resolución de desistimiento. Y lo que abrimos, como ya saben, porque se pretende luchar por conseguir recuperar el montante total de la operación, es una revisión de oficio para conseguir que se declare nulo el procedimiento administrativo. ¿Por qué? Porque se le adjudica

este contrato por una vía de emergencia a una empresa que carece del objeto social para ello, que carece de la solvencia técnica y de la solvencia económica, y, de hecho, a la vista está que nos sirve un material que no es válido.

Es verdad que el artículo 120 de la Ley de contratos, que es el que articula la tramitación de emergencia, articula ciertas prerrogativas para atender a esa necesidad urgente de actuación inmediata, como comentábamos antes, pero no permite obviar ciertos..., bueno, permite obviar, digamos, -perdonen-, ciertos requisitos formales, como la concurrencia, pero no permite en ningún caso saltarse los requisitos sustantivos, como son los de tener una solvencia y tener una capacidad para obrar.

Me parece tan obvio que, si me permiten, ahora no me detengo en ello y, si quieren, como luego tenemos dos intervenciones más, podemos seguir entrando con más detenimiento.

En definitiva, y creo que es necesario hacer este resumen porque son muchas las circunstancias que afectan al expediente y que nos han llevado a gestionar el expediente como lo hemos gestionado, esto que les acabo de explicar es la realidad contrastable de todo cuanto ha acontecido en torno a la compra de las mascarillas que, como sabemos, están siendo investigadas por la Audiencia Nacional y por la Fiscalía Europea.

Son hechos demostrables y no confabulaciones malintencionadas, como algunos se empeñan en defender, con el objetivo de poner el foco allí donde les interesa.

Y a lo largo de esta exposición detallada, creo que ha quedado constatado que los hechos demostrados son los siguientes: en primer lugar, que ningún miembro del Govern de Francina Armengol informó de este expediente que estaba siendo investigado, parece que se oculta esta información; que ningún miembro del gobierno actual, ni ningún miembro del equipo directivo actual del Servicio de Salud ha tenido absolutamente ningún contacto con la empresa investigada; que es claramente el Govern de Marga Prohens quien inicia la reclamación, de hecho, durante más de tres años no se hace ninguna reclamación, durante nueve meses ya llevamos dos reclamaciones; que el expediente no ha caducado, lo único que han caducado aquí son un 1,5 millones de mascarillas; que el certificado, de 12 de agosto de 2020, de conformidad, que, además, se hace obviando el informe del Centro Nacional de Medios de Protección, pone en jaque la reclamación; que, del análisis de todo el expediente, estamos convencidos que hay suficientes elementos de valor para declarar la revisión de oficio, declarar la nulidad del contrato y luchar por recuperar así el montante total de la compra, 3,7 millones de euros; que el desestimiento no se produce en ningún caso por una cuestión de plazos, sino por otros elementos que impiden avanzar en esta reclamación, como el certificado de buena ejecución, que se mencionaba anteriormente; y el convencimiento de que es un contrato nulo de pleno derecho y que queremos reclamar el importe íntegro de la compra; que este govern explora todas las vías para recuperar los 3,7 millones de euros que se pagaron a la empresa de la supuesta trama para la compra de unas mascarillas que no cumplían con la calidad requerida, y que han acabado caducando en un almacén, situación de la que,

lamentablement, la actual administració no fue informada en el traspaso de poderes.

La realidad que algunos quieren ocultar es que el Govern de Francina Armengol compró unas mascarillas para uso sanitario, por 3,7 millones de euros, que no cumplían como FPP2; que, a sabiendas de que no cumplían, las pagó con suma celeridad; que emitió un certificado de buena ejecución y que aprovechó la empresa para trabajar con otras administraciones públicas; que se ocultó información a la Intervención de la comunidad autónoma, a la Abogacía, a la Dirección General de Fondos Europeos, a la Guardia Civil, a sus socios de Govern y a los ciudadanos de las Baleares; que en tres largos años no se reclamó ni un solo euro a la empresa; y que nadie del Govern informó en el traspaso de carteras.

Así que, en definitiva, es el Govern de Armengol el que abre las puertas de par en par a la presunta trama criminal, y las únicas personas que han tenido contacto con la empresa, no sabemos cuáles, porque tampoco nos lo quieren confirmar ni desmentir, son los miembros de ese govern. Y lo demás son conjeturas malintencionadas sin fundamento.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sr. Ureña. Procedeix ara la suspensió de la sessió, per un temps màxim de quaranta-cinc minuts, per tal que els grups parlamentaris puguin preparar la formulació de preguntes o observacions, per la qual cosa es demana als portaveus si volen una suspensió de la sessió o si podem continuar.

Per tal de formular preguntes o observacions, tot seguit es procedeix a la intervenció dels grups parlamentaris.

El Sr. Director General de l'ib-salut pot contestar globalment totes les preguntes o observacions formulades o bé contestar individualment, després de la intervenció de cada portaveu.

EL SR. DIRECTOR GENERAL DEL SERVEI DE SALUT (Javier Ureña i Morales):

Globalmente.

LA SRA. PRESIDENTA:

Pel Grup Parlamentari Socialista té la paraula el diputat, Sr. Bona, per un temps de deu minuts.

Quan vostè vulgui.

EL SR. BONA I CASAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, Sr. Ureña, d'això que deia vostè de desviar l'atenció i posar el focus en allò que interessa, n'acaba de fer vostè un bon exercici, no sé si entén que és vostè qui compareix avui, aquí, a la Comissió de Salut, per tal d'informar sobre el desistiment del Govern en relació amb l'expedient de reclamació a l'empresa Soluciones de Gestión y

Apoyo a Empresas, de la mateixa manera que tampoc no sembla que entengui que en pandèmia la gent feia feina tots els dies de la setmana, amb referència vostè ha dit que no sé què va passar un dissabte, ja veiem que a vostè els dissabtes li cau el "boli", també, aparentment, durant la pandèmia, perquè vostè era tècnic de l'ib-salut.

També té aparaulada una compareixença a la comissió d'investigació que ha iniciat aquest parlament sobre aquest cas i, a més a més, la Fiscalia investiga aquests fets, a instàncies d'un jutge, així que entendriem i, de fet, a nivell personal jo pràcticament li recomanaria que s'acollís vostè al seu dret de no declarar. De totes maneres, vostè ha parlat durant 40 minuts, tot i que ben poc de la seva gestió, però, si la seva decisió és respondre, nosaltres tenim moltes preguntes per formular-li.

Per altra banda, també creiem que és important que comparegui vostè també davant la Comissió de Salut, com fa avui, per tal d'aclarir si la manera com s'ha gestionat aquest expedient és l'habitual que vostè practica amb la resta d'expedients de reclamació que hi ha actualment, o que hi pugui haver en un futur a la Conselleria de Salut, fet que considerem que té interès, més enllà d'aquest cas concret. Així que, si no hi té inconvenient, li formularem les preguntes següents, i, ja li ho dic, si s'acull al seu dret de no declarar, ho entendrem perfectament.

Ens podria dir vostè quants expedients de reclamació gestiona o ha gestionat vostè, directament o indirectament, en els deu mesos que fa que vostè és director general de l'ib-salut, i amb quin resultat? Perquè si no hi ha hagut traspàs d'informació, com així l'expedient ha seguit el seu curs i no s'ha aturat amb el canvi de govern? Se n'ha iniciat algun d'expedient de reclamació sota el seu mandat? Sap més o menys quants s'han resolt a favor de l'empresa i quants a favor de la comunitat autònoma?

Han canviat, per cert, vostès, els continguts dels certificats d'entrega de subministres o segueixen sent tots el mateix?

Hi ha algun expedient que no s'hagi arribat a resoldre i s'hagi desistit a mig fer, com és aquest cas? A quants d'aquests s'han rebut pressions per part de l'empresa adjudicatària, tal i com indica un jutge de l'Audiència Nacional que ha succeït en aquest cas? A quants d'aquests casos aquestes pressions tenen èxit? I a quants casos les empreses visiten l'ib-salut? Perquè l'empresa visita l'ib-salut, però vostè ha dit que no hi ha hagut contacte.

A quants casos no figuren a l'expedient les persones que visiten l'ib-salut, ni quin personal de l'ib-salut l'acompanya? A quants d'expedients de reclamació no responen les al·legacions de l'empresa mai, o la rectificació d'algun deficiència?

És vostè qui decideix no respondre les al·legacions o qui pren aquesta decisió?

I quants expedients de reclamació es deixen caducar? Quants expedients de reclamació no arriben al Consell Consultiu sense que hi hagi hagut abans un acord amb l'empresa?

Quants expedients de reclamació no arriben a resoldre's davant d'un jutge, si la voluntat del Govern tirar endavant la reclamació fins al final?

I sobre quants expedients de reclamació es prenen decisions sense cap tipus d'assessorament jurídic? De qui rep assessorament el director general de l'ib-salut, a l'hora de prendre decisions sobre els expedients de reclamació i sobre aquest expedient en concret?

Es comunica vostè amb l'Advocacia de la comunitat autònoma o amb la Secretaria General de la Conselleria de Salut?

La de desistir, és una decisió col·legiada entre membres del Govern o és una decisió que pren vostè *motu proprio*?

Quan el van nomenar, la premsa va dir que vostè formava part del nucli dur de la Sra. Prohens, ja que vostè forma part del comitè de direcció del Partit Popular de les Illes Balears, és una decisió la que afecta aquest cas que pren vostè, per tant, consultant-la amb destacats membres del comitè de direcció del Partit Popular?

De quants expedients de reclamació s'ha desistit sense respondre les al·legacions? De quants expedients de reclamació s'ha desistit sense aportar cap document que argumenti o justifiqui la decisió de desistir de l'expedient?

Creu que aquest és un procediment habitual?

Coneix vostè l'article 93 de la Llei 39/2015, de la Llei de procediment administratiu comú, que diu que "En els procediments iniciats d'ofici l'administració podrà desistir, motivadament, en els supòsits i requisits prevists a les lleis"? Es motiven els desistiments a l'ib-salut o sempre passa com amb aquest expedient?

Entenem que vostè sí coneix aquesta llei, perquè la cita a l'expedient a l'hora d'indicar quin és el termini de caducitat, una vegada s'ha notificat a l'empresa la reclamació, i aquest, segons la llei i segons el mateix expedient, és de 3 mesos. Quantes vegades s'ha hagut de canviar la data de caducitat de l'expedient, tal i com ha succeït en el cas que ens ocupa? Vull deixar clar en aquest punt que no es tracta únicament de canviar "tres mesos" per "vuit mesos", canviant un "3" per un "8", perquè vostè té mala lletra de metge, que, a més, això es fa mecanografiat i el 3 i el 8 estan prou enfora d'un teclat, sinó que, a més, quan l'expedient inicialment diu que el termini és de tres mesos, se cita una llei per justificar aquest termini. En canvi, quan es vol fabricar una nova data de caducitat *a posteriori*, dient que no, que el termini era de vuit mesos, se cita una altra llei.

Tot això vostè ho considera un error material, segons recull a les seves declaracions i ha dit vostè avui aquí, què és per a vostè un error material, Sr. Ureña? A quants expedients de reclamació que actualment que actualment cursen a l'ib-salut afecta aquest canvi de criteri? Hi ha més expedients on figurava un termini de tres mesos i ara hi figureu un termini de vuit?

A què respon que el Govern hagi defensat públicament en nombroses ocasions, vostè mateix, i fins i tot la Sra. Prohens, que la caducitat era de vuit mesos, mentre hi havia un expedient que vostès no mostraven, que deia que era de tres mesos?

Quin sentit té canviar un termini de caducitat de l'expedient de reclamació, quan hi ha una sentència del Tribunal Suprem que assenta jurisprudència i que ratifica que el termini és de tres mesos? No creu que encara té menys sentit fer-ho quan l'existència d'aquesta sentència ja feia setmanes que formava part del debat públic? Perquè la sentència del Tribunal Suprem, vostè acaba més o menys de qualificar-la d'"*hipòtesis sin sentido*".

Quin termini per resoldre una reclamació apliquen actualment a les reclamacions que realitza l'ib-salut? Segueixen mantenint que el termini és de vuit mesos, malgrat saber, com ja sap tothom, que hi ha una sentència del Tribunal Suprem que diu el contrari? Qui li fa veure que ha de canviar la data de caducitat de l'expedient, setmanes després que s'hagi donat a conèixer la interlocutòria del jutge, que indica que el 18 de gener l'empresa deixa de mostrar preocupació per la reclamació iniciada per l'anterior govern, perquè s'ha complert el termini de caducitat de tres mesos i, en canvi, es congratula l'empresa d'haver aconseguit amb vostès que la reclamació quedi en no-res?

Per què creu que l'empresa estava tan nerviosa de l'existència d'aquesta reclamació? Qui el fa desistir a vostè de la reclamació?

A quants casos estan vostès disposats a fer *borrón y cuenta nueva*, tal i com es desprèn de les escoltes judicials? Creuen que aquest comportament, consistent a perdonar reclamacions que va iniciar el govern anterior, és la manera d'actuar en benefici de la ciutadania de les Illes Balears i de l'interès general?

A quantes reclamacions més han renunciat? Quantes persones participen en una decisió d'aquestes característiques? Pensa canviar res de la seva manera de procedir al capdavant de la direcció general arran d'aquests fets?

El mateix dia que vostè decideix desistir de la reclamació, vostè inicia un nou procediment de revisió d'ofici, per declarar la nul·litat del contracte d'emergència. Això també és una decisió que pren vostè sense consultar ningú o la consensua amb qualcú o li ve imposada? Pensa vostè demanar la nul·litat d'altres contractes que hagi realitzat l'ib-salut o només d'aquest? És conscient que demanar la nul·litat és perfectament compatible amb la reclamació que l'anterior govern va iniciar, si aquesta no havia caducat, com vostè defensa?

Per què inicia el procediment per declarar la nul·litat del contracte, justament el mateix dia que decideix desistir de la reclamació, quan no hi ha cap necessitat que es desisteixi, o s'hagi resolt la reclamació per demanar la nul·litat del contracte, perquè són dos processos que poden transcórrer perfectament en paral·lel?

El Sr. Antoni Costa, portaveu del Govern, va declarar que per què hauríem de sol·licitar 2,6 milions d'euros, si podem

demanar l'import íntegre de 3,7 milions d'euros. No creu que hauria estat millor idea cursar les dues sol·licituds en paral·lel i deixar que un jutge decidís quina era la reclamació que podia prosperar, en augmentar així les probabilitats d'èxit? Perquè l'únic que diu l'expedient respecte del desistiment, no fa referència a res del que ha dit vostè aquí, perquè vostè sap perfectament que un certificat d'entrega de subministres no implica, en cap cas, que no es pugui reclamar per un incompliment de contracte, segons acord de la Junta Consultiva de Contractació de les Illes Balears, acord de 9 de gener del 2020, que cita una junta consultiva de contractació de l'Estat, informe 6/2001, de 6 de juliol de 2001.

Per tant, tot el seu discurs és polític, ja que sap que tot el que vostè diu aquí no té rellevància jurídica, quan vostè és aquí per defensar els interessos dels ciutadans i ciutadanes de les Illes Balears. Li demanariem, per tant, que en lloc de desviar l'atenció, se cenyís vostè a l'objecte de la seva compareixença i, si ho desitja, ens doni explicacions de la seva gestió i respongui les preguntes que li hem formulat.

Res més. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Bona. Pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca té la paraula el diputat, Sr. Apesteguia, per un temps de deu minuts.

Quan vostè vulgui.

EL SR. APESTEGUIA I RIPOLL:

Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta. Moltes gràcies, Sr. Ureña, i a tot el seu equip per ser avui aquí.

Mirín, el meu grup parlamentari no va votar a favor de la seva compareixença, perquè consideram que havent-hi creada una comissió d'investigació que ateny l'objecte de la seva compareixença, ja en el moment que es va formular aquesta petició i que va ser aprovada per aquesta comissió, no tenia cap tipus de sentit. I, a més, en el moment, és veritat que encara no s'havien fixat quins serien els compareixents a la comissió d'investigació, però ja s'havia anunciat la seva voluntat de comparèixer i també la voluntat d'acceptació per part dels grups majoritaris d'aquesta cambra. I això ens va fer pensar quin era l'objecte de la petició.

I li he de dir que, des del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, des de fa molta estona diem que sobre el cas que ens afecta, que és el cas de corrupció conegut com a "Cas mascaretes" i que ha tengut una deriva important a la nostra comunitat autònoma, s'ha d'abandonar la teatralització per part dels partits polítics, i hauríem d'anar una major rigorositat i seriositat. I crec que la seva compareixença en aquesta comissió, totalment legítima, obeeix, o obeïa la petició, precisament, a mantenir aquesta teatralització, i per això no hi vàrem donar suport, perquè nosaltres entenem que les preguntes que li hem de fer al voltant del seu desistiment, que és precisament l'objecte de la seva compareixença, li formularem a la comissió d'investigació, que és allà on precisament hem d'esclarir els assumptes tractats.

Dit això, també ens va sorprendre que el seu mateix grup parlamentari hi votàs a favor, supòs que, així com per part del Partit Socialista, es posarà en qüestió la seva gestió al voltant d'aquest contracte, per part del Partit Popular s'aprofitarà per posar en qüestió la gestió de govern anterior. I vostè ja ho ha apuntat a la seva exposició inicial, que no ha fixat la seva posició sobre el desistiment, que és precisament l'objecte de la seva compareixença la qual va ser demanada pel Partit Socialista i va ser votada a favor pel seu grup parlamentari. Aquest era l'objecte.

Vostè ens ha fet un llarga exposició sobre tot el contracte, del qual aquest grup parlamentari no tenia cap dubte que vostè en tenia un coneixement exhaustiu, però vostè també ha d'entendre que els grups parlamentaris també tenim la capacitat de llegir i que, per tant, no necessitàvem que vostè ens fes una lectura de tota la documentació que ja va ser lliurada per part seva a tots i cadascun dels grups parlamentaris.

La presidenta ha decidit no cridar-lo a l'ordre i, per tant..., -a la qüestió- i, per tant, entenc que vostè ha pogut fer allò que li ha semblat oportú.

Nosaltres som aquí perquè és la nostra obligació, hem estat cridats a aquesta comissió, hi assistim i escoltarem tot allò que vostè vulgui dir, però les preguntes que li vulguem fer al voltant del desistiment o de qualsevol altre aspecte que tenguim a veure amb l'expedient relacionat amb Soluciones de Gestión, les hi farem a la comissió d'investigació, que és on s'hauria d'haver produït o on es produirà, i que, per tant, no participarem en una cosa que, a més, no ens donarà gaire llum, perquè he de dir que he de lamentar que vostè ni tan sols s'hagi acollit a respondre individualment a cadascun dels grups, sinó que ens respondrà a tots globalment, imagín que allò que consideri oportú. Però consideram que un diàleg interactiu és el que enriquirà, donarà llum, i on vostè podrà explicar-se de forma detallada en tot allò que interessi als grups parlamentaris.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Apesteguia. Pel Grup Parlamentari Mixt té la paraula el Sr. Castells, per un temps de deu minuts.

Quan vostè vulgui, Sr. Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. I, en primer lloc, com ja es pot imaginar, vull expressar la meua protesta, primer, envers vostè, Sra. Presidenta, perquè crec que ha fet deixament de les seves funcions, vostè té l'obligació de cridar a l'ordre als..., a cridar a la qüestió a qualsevol intervinent que no s'ajusti a la qüestió, i és evident que el Sr. Ureña s'ha dedicat 30 minuts, del temps de tots, a parlar d'un tema que no era el que ocupava aquest ordre del dia. Per tant, Sra. Presidenta, exprés la meua protesta cap a vostè o cap a la Mesa.

I després, també, Sr. Ureña, a vostè també li retrec el que considero que és un abús de la nostra paciència, perquè vostè em sembla que té molt clar que ve aquí a informar sobre el

desistiment. Com molt bé ha dit el Sr. Apestegua, tot el que ens ha explicat ens ho sabem de memòria, el que vostè volem que ens expliqui són els motius pels quals va desistir, sense cap informe, ni sense cap motivació, d'una reclamació de 2,6 milions d'euros.

Fets aquests preliminars, jo, bàsicament, em centraré a fer-li qüestions al voltant..., o a formular-li preguntes al voltant de tres qüestions; és a dir, vostè mateix, signat per vostè mateix, el 24 d'agost fa una resolució d'inici del procediment de resolució parcial del contracte, en què es diu que la caducitat és de tres mesos.

En segon lloc, ho comuniquen a l'empresa interessada el 17 d'octubre. I, per tant, d'acord amb el que vostè mateix havia escrit i havia signat, el termini per resoldre acabava el 17 o el 18 de gener, i fins el 19 de març no apareix la diligència, al cap de dos mesos que, d'acord amb el que vostè havia signat i, per tant, m'imagín, el que vostè tenia al cap, o és que vostè va signar que caducava al cap de tres mesos sabent que caducava al cap de vuit mesos? No. Jo vull pensar que vostè, potser erròniament, va signar que això caducava al cap de tres mesos i, per tant, tant vostè, com tot el seu equip, van estar una sèrie de mesos pensant que allò caducaria al cap de tres mesos d'haver-se comunicat a l'empresa interessada.

Llavors, la meva pregunta és: entre el 18 de gener que, d'acord amb els seus mateixos escrits, això ha caducat, i el 19 de març, en què fan una diligència que diu: no, no, no va caducar el 18 de gener, és al cap de vuit mesos; entre aquests dos mesos vostès en quina situació mental es trobaven? És a dir, devien creure fermament que tenien l'expedient caducat. Perquè, és clar, les persones ens obliguem pels nostres propis actes.

I, per tant, fins que no es corregeix aquell acte, per a l'ib-salut allò caduca el 18 de gener. Doncs, la meva pregunta és: en quin estat mental es trobava vostè entre el 18 de gener i el 19 de març respecte de la caducitat de l'expedient? Perquè no hi ha cap paper, almenys no l'hem conegut nosaltres, ni hi ha cap actuació, ni hi ha cap indicatiu que vostès veiessin que calia rectificar aquest aspecte. Aquest és el primer tema, la primera pregunta: quin era el seu estat d'ànim, el seu estat mental, la seva situació respecte d'aquest tema?

Segon tema, segona qüestió, el 21 de març de 2024 vostè signa la resolució de desistiment, dos dies després de la diligència que diu que hi havia un error. D'acord. I vostè ha dit ara -ha dit ara- que hi havia tres motius per desistir: primer, que hi havia uns vicis ocults, un certificat de conformitat, llavors ha dit un parell de vegades: "*que se obvia en el informe-propuesta*", hi ha fet èmfasi: no, a l'informe-propuesta s'obviava que hi havia aquest vici ocult. Després hi tornaré sobre això. Primera causa. Segona, perquè no es pot recuperar el muntant total, i tercera, perquè hi ha vicis de nul·litat, perquè durant l'anàlisi varen detectar vicis de nul·litat.

Molt bé. Vostè ha dit tres motius -tres motius-, però a la seva resolució, com a motivació, no s'esgrimeix cap d'aquests motius, cap motiu, no hi ha cap motivació. Vostè fa una sèrie de constatació de fets, una sèrie de fonaments de dret i una resolució, però no explica què motiva la resolució. L'únic que

puc entendre, puc assumir que la del vici de nul·litat hi és perquè hi ha un punt que es refereix al vici de nul·litat, però als altres dos no s'hi fa cap referència. Em fa gràcia que vostè tiri en cara l'informe-propuesta que li va arribar on s'obviava el certificat de conformitat i, en canvi, vostè, a la seva resolució per desistir, també l'obvia, no hi fa referència, només diu que l'administrat, l'empresa interessada va al·legar això, però vostè no diu a la seva resolució si considera que l'empresa té raó o no té raó, és a dir, no fa cap referència sobre això.

Per tant, és un acte que està mancat de motivació. Vostè fa, desisteix d'una reclamació de 2,6 milions d'euros sense motivació, que ens porta al tema vinculat a aquest, que és com signa vostè una renúncia a reclamar 2,6 milions d'euros sense cap informe que ho avaluï! És a dir, no el motiva -ara dona els motius-, però a l'escrit no ho va posar, no ho va posar, i no té cap informe que ho avaluï. Per tant, aquesta seria la segona qüestió.

La tercera qüestió va sobre la diligència, la famosa diligència que signa *la jefa del departamento de Contractación*, la Sra. Laura Montserrat, aquest document orfe, aquest document que està més sol que la una. La meua pregunta és: va demanar vostè aquesta diligència? Perquè, sincerament, tot l'efecte, és a dir, el lògic què seria?, que algú li hagués vingut a portar aquesta diligència i que vostè hagués desistit, però l'efecte que fa, Sr. Ureña, és el contrari, és que vostè volia desistir i per desistir necessitava aquesta diligència, que li arriba dos dies abans de signar el desistiment i quan fa dos mesos que, segons vostès, l'expedient no havia caducat.

Llavors, la meua pregunta concreta: vostè va demanar aquesta diligència, que aquesta funcionària estengués aquesta diligència? O vostè es va assabentar que la reclamació no havia caducat el 18 de gener, quan va rebre aquesta diligència? Perquè, és clar, sobre el paper va ser així, vostè havia signat que això caducaria al cap de tres mesos, per tant, el dia 18 de gener, i fins al cap de dos mesos no rep aquesta diligència. Llavors, la meua pregunta és: vostè es va assabentar que, segons els serveis tècnics de l'ib-salut, la reclamació caducava en vuit mesos, quan va rebre aquesta diligència? Perquè, si no és així, Sr. Ureña, fa la impressió que aquest expedient està construït.

I de veritat que no li atribueix cap mala fe en aquest aspecte, simplement li dic la impressió que fa, perquè vostè m'ho pugui desmentir.

I per acabar, error de forma, home!, perdoni, error de forma, dir-li a l'administrat un termini que genera drets a favor d'ell, això no és un error de forma, això és un error de fons. Si vostè li dona a l'administrat un termini que té efectes a favor d'ell, que és la caducitat, això no és un error de forma. És a dir que jo dubto, aquesta és l'última qüestió, una qüestió, si vol, una digressió, perquè no té sentit que vostè i jo discutim d'aquest aspecte jurídic, però jo poso molt en dubte que haver-li donat un termini erroni a un administrat, quan aquell termini juga al seu favor, rectificar-lo sigui un simple error de forma.

I això és tot, Sra. Presidenta, gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Castells. Pel Grup Parlamentari Popular, té la paraula la Sra. Borrás, per un temps de deu minuts.

Quan vulgui.

LA SRA. BORRÁS I ROSSELLÓ:

Gràcies, presidenta. Bona tarda, diputades i diputats. Buenas tardes y bienvenidos a esta cámara, Sr. Ureña y todos sus acompañantes. En primer lugar, agradecerle su disponibilidad, su disposición, su motivación, su buen tono y sobre todo su cordialidad. Gracias por aceptar de tan buen grado y con diligencia la primera fecha que le propuso esta comisión, a pesar de que todos sabemos que hubiera podido retrasarla, sobre todo después de la denuncia contra usted del Partido Socialista.

Creemos que era importante para esta Comisión de Salud clarificar algunos aspectos que, a pesar de que los ha explicado en múltiples ocasiones y siempre que le han preguntado, la oposición ha querido ensuciar en un intento desesperado de desviar la atención, el foco, el motivo principal que nos ha llevado hasta aquí, que es la compra, por valor de 3,7 millones, por parte del anterior govern, de unas mascarillas sospechosas desde el minuto cero.

Esta comparecencia, sin duda, nos ha ayudado a esclarecer muchos de los aspectos a los que nos encontramos aquí, el Partido Popular le dio el soporte, cómo no, porque estaba seguro que no había nada que esconder.

Por deformación profesional, le formularé cuestiones que tienen mucho que ver con los pacientes y con los profesionales, y poco, probablemente, con estos... pequeños puntos y comas de los expedientes. Entendemos que la izquierda no quiera saber el recorrido de todo el expediente, pero los ciudadanos sí lo quieren saber y los profesionales un poquito más. Y repito que no estaríamos aquí si el anterior Govern no hubiese comprado unas mascarillas defectuosas, no hubiese abonado 3,7 millones de euros, no hubiese mentido a Europa, no hubiese mentido a la UCO y no hubiese mentido a la ciudadanía. No estaríamos aquí.

Y ahí van mis preguntas: ¿Nos puede aclarar qué mascarillas se compraron y qué mascarillas se recibieron? ¿Para qué estaban destinadas las mascarillas que se compraron?

Usted, en estos ocho meses de estar al frente del ib-salut, y después de lo ocurrido, habrá tenido tiempo de revisar otros expedientes, ¿era habitual que el PSIB, el director general o el director de Gestión, cuando gobernaban, dejaran en manos de los funcionarios la decisión de compra de expedientes por un valor de casi 4 millones de euros?

El 8 de junio de 2020, se recibió un informe del Centro Nacional de Medios de Protección con el resultado de la verificación de las mascarillas, creo necesario que nos pongamos en situación, en aquel momento había falta de material cada día, había miles de muertos. Los titulares de aquel día, los voy a recordar: "España tiene 241.550 personas

con coronavirus, 27.136 fallecidos", era el día en que se decretaba que el uso de las mascarillas sería obligatorio para los mayores de seis años, que solo habíamos empezado a pasear un rato por la mañana y por la tarde, acabábamos de estar encerrados, casi todos, había gente que no estaba encerrada y podía ir de bares. Que seguía habiendo falta de material de protección y de diagnóstico, en aquel momento eran las PCR, y sobre todo nuestros profesionales ya estaban muy agotados por falta de descanso, en estas circunstancias que comuniquen que 1,4 millones de mascarillas de cualquier material comprado por el que has pagado 3,7 millones, conociendo a la administración, tuvo que haber un poco de revuelo, ¿no le parece?

¿Qué pasó con este informe? ¿A quién se le comunicó? ¿Existen correos de comunicación al director general, a la consellera...? No nos constan en la documentación que nos han hecho llegar.

¿Se comunicó a la Agencia Española del Medicamento para que pudiesen advertir a otras comunidades autónomas o a otros países que había un material que era falso?

¿Se solicitó algún informe a Prevención de Riesgos Laborales? ¿Se solicitó algún informe a Seguridad del Paciente? Recordemos que ha dicho que en algún momento dijeron que eran de uso ciudadano, y no intrahospitalario. ¿Preguntaron o solicitaron algún informe a Seguridad del Paciente para poderlas emplear?

¿Podría tratarse de un delito no notificar a las autoridades sanitarias el conocimiento de unas mascarillas con falsa apariencia de FFP2?

Ante un informe como el del Centro Nacional de Protección ¿se puede asegurar que una mercancía de protección es satisfactoria, como se hizo? ¿Se puede asegurar que los pedidos se han resuelto sin incidencias, como se hizo? ¿Estos informes son de trámite, como se ha asegurado, o se hacen a petición del interesado?

¿Había algún protocolo escrito de cómo se resolvería el hecho de que unas mascarillas con falsa apariencia de FFP2 se utilizaran por los ciudadanos como higiénicas en su domicilio?

¿Puede aclararme la media del tiempo en que se suelen abonar los pedidos en el ib-salut? ¿En cuánto tiempo medio suelen reclamarse los pedidos?

¿Es habitual que la UCO se persone en las dependencias del Servicio de Salud para requerir información, tal y como manifestaba el anterior director general?

¿Cuándo tiene conocimiento usted de este expediente administrativo?

Usted estuvo en el traspaso de poderes con la exconsejera Gómez y con el anterior director del Servicio de Salud, el Sr. Palomino, ¿le informaron de la compra de mascarillas que estaba siendo investigada?

Y siendo ya director general del Servicio de Salud, ¿alguien de la empresa investigada ha contactado directamente con usted, ha mantenido contacto alguno verbal, telefónico, por correo o por WhatsApp como representante de la empresa, y a algún miembro de su equipo?

Al PSIB le sorprende que el desistimiento se hace sin informe jurídico que lo avale, ¿hay algún informe que avale la compra de mascarillas?

Hace unas semanas la UCO se personó en las dependencias del Servicio de Salud, ¿estuvo presente? ¿Puede adelantarnos qué información solicitaron?

El PSIB ha denunciado por supuestos delitos... lo ha denunciado a usted por supuestos delitos de malversación, prevaricación y tráfico de influencias, ¿está tranquilo? ¿Cree que es una técnica de distracción para desviar la atención?

Y a mí me gustaría una pregunta más, ¿hay en el SAP más mascarillas codificadas como de uso ciudadano no intrahospitalario?

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Borràs. Ahora contesta el Sr. Javier Ureña, sin límite de tiempo.

Cuando usted quiera.

EL SR. DIRECTOR GENERAL DEL SERVEI DE SALUT (Javier Ureña i Morales):

Sí, permítanme, porque han sido muchas... muchas preguntas. Yo, señores diputados, les quiero pedir disculpas si en mi primera intervención me he alargado mucho, pero, sinceramente, necesitaba, y creía que era conveniente y que era importante y era necesario para poder llegar a ese desistimiento y a esa primera reclamación parcial, conocer todas las circunstancias que afectan al expediente, que son muchas, y cómo..., sobre todo en la primera parte de estos hechos, este equipo directivo del Servicio de Salud actúa sin tener toda la información necesaria para hacerlo.

Y, como también se ha comentado, entendemos que el desistimiento estaba justificado y, de hecho, está justificado en la misma resolución. Y la resolución contiene el principal hecho y más fundamentado a nivel administrativo, que es la sospecha de que este contrato debería ser declarado nulo de pleno derecho, con lo cual no tendría sentido ninguna otra reclamación parcial.

Pero es que vayamos un poco más allá y hagamos un ejercicio, imaginemos que estamos en el 21 de febrero, que es el día que se conoce la actuación de la Audiencia Nacional, y en ese momento -hagamos este ejercicio de imaginación- no hay ninguna reclamación parcial en marcha. Entonces, tenemos conocimiento de que ha habido unas detenciones de unos miembros de una empresa que han servido un material al Servicio de Salud, que el material no era lo que debería ser y,

además, nunca se ha utilizado. En ese momento, entenderíamos que pusiésemos en marcha una reclamación, ¿alguien defendería una reclamación parcial, solo de una parte del importe de la compra?

Yo, sinceramente, si ahora salimos de aquí porque tenemos un poco de hambre y pedimos un batido, y nos ponen un café, ¿vamos a pagar el café, y más si no nos lo vamos a beber? Es que, imaginemos, por favor, que somos una comisión de compras de una administración pública, la Guardia Civil, por si acaso nos está escuchando, ayer hubo un incendio en un almacén de la Guardia Civil y se han destruido... -perdón-, todos los cascos de la unidad motorizada de la Guardia Civil, un acontecimiento totalmente imprevisible y ante el que hay que actuar de una manera inmediata. Y, con una tramitación de emergencia, compramos centenares o miles de cascos para la unidad motorizada de la Guardia Civil. Recibimos los cascos, los pagamos y, como tenemos dudas, los llevamos a analizar, y, una vez los llevamos a analizar, nos dicen que no tienen protección de casco de moto, que tienen protección de casco de bici, que aquello a más de 40 kilómetros por hora no es seguro. ¿Qué hacemos, los pagamos como cascos de bici? Es que esto es lo que ha pasado con estas mascarillas.

Y luego, aparte, ¿es seguro repartir cientos o miles de cascos, que parecen cascos de moto, pero que tienen la protección de cascos de bici? ¿Es seguro repartir eso entre la población? Porque esto es lo que ha pasado con estas mascarillas. Tenemos un 1,5 millones de mascarillas que lo que se ha deslizado en algún momento es que son mascarillas quirúrgicas, y no son mascarillas quirúrgicas, son mascarillas con apariencia de FFP2, pero con capacidad de filtrado quirúrgica. ¿Hubiese sido, como preguntaba ahora la diputada del Grupo Popular, seguro repartir masivamente, porque un reparto de 1,5 millones de unidades es un reparto masivo, entre la población, una cosa que parece una mascarilla, un tipo, y realmente es otra, de un nivel de protección menor? Es que eso no hubiese sido seguro nunca. Por eso, muy probablemente nunca se repartieron; no sabemos por qué no se repartieron, pero esa es la hipótesis que manejamos, lo que pasa es que tampoco nos lo quieren contar. Igual que no quieren resolver absolutamente ningún otro de los interrogantes del procedimiento.

Entonces, en ese punto, de verdad, ¿ustedes creen que el debate es reclamación parcial o no reclamación parcial? Aquí nosotros nos sentimos totalmente obligados a ir a por el montante total de la operación, porque consideramos que es el perjuicio que han sufrido los ciudadanos de las Islas Baleares, por supuesto, y entendemos que es un contrato nulo de pleno derecho, porque esta empresa carece de objeto social, carece de la solvencia necesaria y, precisamente, vemos cómo nos ha servido un material que no era el correcto.

Y ahora, si puedo, porque no ha sido fácil, porque son muchas preguntas, yo, además, atendiendo a que ustedes, que son los denunciantes, me inviten a que me acoja a mi derecho a no declarar, y luego el número de preguntas, que han sido mucho, yo no sé si lo que quieren es explicaciones y son aclaraciones, o es que precisamente lo que quieren es otra cosa.

A mí, Sr. Bona, yo no sé lo que hace usted durante la pandemia, yo sí que sé que durante la Semana Santa estuve en el Hospital de Inca, porque ni el personal de gestión y servicios disfrutamos de días de fiesta; que un domingo por la noche me vi, yo personalmente, redactando el consentimiento informado para las PCR de todo el Servicio de Salud; y que en un momento dado, durante la pandemia, yo tuve que ir (...) en China, porque hacía falta alguien fuese a buscar material, y parece que de todos los equipos directivos que había en el Servicio de Salud no podía ir nadie más.

Esta es un poco la historia. Así que, bueno, caída de boli, en fin.

Y ya que lo dice, núcleo duro o no núcleo duro, también hay una entrevista del Sr. Juli Fuster, que dice que yo era alguien parte de su equipo. Yo con Juli Fuster he hablado una vez en mi vida y siendo director general ya, pero él me considera de su equipo. O sea, para que vea, debe ser que yo a lo mejor estoy como muy demandado por todas las partes.

Claro que hay visitas al Servicio de Salud por parte de empresas, evidentemente, todas las empresas que están en un procedimiento administrativo tienen derecho a acceder al expediente y son numerosas las que acceden, de hecho, le invito a que toda esta lista de preguntas, que yo, ahora lo siento, pero me siento incapaz de contestarlas, porque no me ha dado tiempo ni a apuntarlas, nos las traslade por escrito y estaremos encantados de contestárselas todas.

Me preguntaba también si en algún procedimiento o en algún hecho similar no se contestaban las alegaciones. Como les he dicho, sí, en el oficio del 20 de marzo de 2023, el director general de entonces manda el oficio a la empresa, la empresa contesta con unas alegaciones y no se les contesta. De hecho, las alegaciones presentadas en el mes de noviembre sí que se contestan en la resolución de desistimiento.

En la nulidad del procedimiento ustedes no creen, me parece perfecto, de hecho, lo que no entiendo es por qué sistemáticamente se ponen del lado de la empresa. Les parece mal que vayamos a por la nulidad; cuando hay que decidir sobre un plazo, se ponen también del lado más conservador de la empresa; y cuando queremos reclamarle el montante total de la operación, también les parece mal. Yo no sé si tienen algún tipo de compromiso o no sé si tienen algún tipo de relación con la empresa, pero nosotros, evidentemente, lo que vamos a defender son los derechos de los ciudadanos.

Preguntaba también si hay algún expediente de resolución contractual que hayamos puesto en marcha últimamente. Yo, lo siento, de cabeza me suena el hospital..., el... sí, el contrato de obra para la construcción del Hospital Verge del Toro en Menorca, por unos defectos en la previsión, tanto de plazos como de importes. Estamos en fase de resolución y esa resolución de inicio ya se le ha comunicado a la empresa.

Y respecto al cómputo de plazos, comentaba también la sentencia del Tribunal Supremo. La sentencia del Tribunal Supremo se refiere a un expediente de Canarias, que, además, está tramitado con la ley antigua, con la Ley 30/2007, y la diferencia principal que estriba, a mi entender, y aquí entiendo

opiniones jurídicas distintas, es que la Comunidad Autónoma de Canarias no tiene un decreto de contratación como el 14/2016, que tenemos aquí, en Baleares, que, para mí marca el hecho diferencial; sin embargo, la sentencia del Tribunal Supremo, además, es de 29 de enero de 2024. Entonces, qué se supone, que cuando la trama, que ya les he dicho que no contacta con nosotros, ¿contacta con nosotros y nos pide que dejemos caducar el expediente, y nosotros les decimos que hablen con el Tribunal Supremo, para que el Tribunal Supremo sentencie que el plazo es de tres meses? No sé muy bien cómo cuadra con esta hipótesis el hecho que, de manera sobrevenida, por su cuenta, el Tribunal Supremo, según su interpretación, sea el que diga que el plazo es de tres meses. Que, en ningún caso, -y aquí también voy al Sr. Castells- el plazo puede ser de tres meses, porque, de acuerdo con el artículo 50 de la Ley 3/2003, de régimen jurídico de la comunidad autónoma, la duración de los procedimientos en la comunidad autónoma de Baleares, si no hay norma específica al respecto, que para nosotros sí que la hay, como les decía, de ocho meses, son de seis meses. Con lo cual, los tres meses nunca pueden ser un plazo.

Y, es más, y hablando de estados mentales, no entremos en el marco mental de la gente que quiere confundir y de la gente que quiere enfangar, porque el plazo tampoco puede acabar nunca el 18 de enero, por mucho que a eso apunte la trama, muy erróneamente. ¿Por qué? Porque el plazo se inicia con la resolución, con lo cual el plazo empezó a contar el día 24 de agosto. Con lo cual, la hipótesis de la trama es totalmente descabellada, tanto por la duración del plazo, como por la fecha de inicio del cálculo.

Yo, Sr. Castells, evidentemente, se lo voy a contestar también muy firmemente, evidentemente, yo no pido la diligencia; de hecho, yo no le he dado, en ese sentido, ninguna orden, ni ninguna indicación, a ningún funcionario del Servicio de Salud, y lo quiero decir tajantemente, y quiero ser muy claro al respecto. Y, como le decía, el plazo nunca puede ser de tres meses, sino que sería de seis, en caso de que aplicásemos la Ley de régimen jurídico de la CAIB, y nunca se iniciaría con la notificación el 18 de octubre, sino que se inicia el 24 de agosto, con la resolución de inicio. Con lo cual, y hablando de estados mentales, entiendo que no hay que entrar en el marco mental de la trama, porque hacen un cálculo que, como le digo, es totalmente erróneo.

Y, Sr. Apesteguia, como le decía yo, les pido disculpas, pero entiendo que era estrictamente necesario hacer toda esta explicación y todas las que hagan falta, dadas las circunstancias que afectan a este caso.

Y, por otro lado, Sra. Borrás, como ya hemos explicado un poco, de la información que tenemos hay que deducir, inequívocamente, que las mascarillas que se pretenden comprar son de uso hospitalario y, sin embargo, las que llegan y las que se codifican son de uso domiciliario. No nos consta que... o no tenemos ninguna información respecto a la difusión del informe del Centro Nacional de Medios de Protección, para nosotros, con la información que tenemos, ese informe, entre comillas, permítanme la expresión, desaparece en verano de 2020 y no vuelve a aparecer hasta el año 2023.

Y, como les decía, también nos suscita muchas dudas el hecho de que se pretendiese o se quiere apuntar a un pretendido reparto masivo de mascarillas, que eran una cosa distinta a lo que parecían, porque entendemos que puede ser un problema de seguridad grave.

Evidentemente, no son habituales las visitas de la UCO al Servicio de Salud, por mucho que alguien haya querido decir lo mismo, y de hecho en los últimos años solo tenemos constancia de estas, de la de julio de 2022, y de la que se produce hace una serie de semanas.

Nos indicaron que son diligencias secretas, con lo cual yo no puedo dar información al respecto, pero sí que se ha publicado que se que se dilataron durante muchísimas horas, y sí que quiero trasladar una sensación de tranquilidad total y máxima colaboración.

En los traspasos, como hemos comentado, no se comentó nada de este expediente, no ha habido absolutamente por parte de ningún alto cargo del Gobierno, ni de ningún miembro del equipo directivo, ningún contacto con la empresa investigada. Evidentemente, pero esto no lo señalan, no había ningún informe jurídico que avalase esta compra fallida.

Sobre la denuncia, evidentemente, tranquilidad absoluta, ningún problema.

Y este pedido es el único pedido que se ha codificado con este código en el programa de inventario del Servicio de Salud.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gracias, Sr. Ureña. Ara passarem al torn de rèplica i pel Grup Parlamentari Socialista té la paraula el Sr. Bona, per un temps de cinc minuts.

EL SR. BONA I CASAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, Sr. Ureñas, si té dubtes de quins interessos defensam és tan senzill com veure que hem denunciat també l'empresa adjudicatària.

El resum d'aquesta història és que l'anterior govern va iniciar una reclamació, per un incompliment de contracte; després entren vostès al Govern, i no responen mai les al·legacions de l'empresa adjudicatària. Hi ha escoltes judicials de l'Audiència Nacional on els investigats de l'empresa insulten els membres de l'anterior Govern per haver reclamat i es congratulen d'haver aconseguit que el Govern de la Sra. Prohens no tiri endavant la reclamació.

Dia 18 de gener, s'acaba el termini de tres mesos que el mateix ib-salut va establir al seu expedient per resoldre la reclamació, i el mateix jutge conclou, a la seva interlocutòria, que les pressions de l'empresa han tengut efecte. Els tres mesos, per cert, comencen a comptar a partir del moment que vostès ho notifiquen l'empresa, dia 17 d'octubre.

Però l'expedient en aquell moment no era públic, i el Govern, inclosa la Sra. Prohens, surt a dir que el termini és de vuit mesos, malgrat l'oposició li fa veure que, per llei, i així ho diu una sentència del Tribunal Suprem, realment el termini és de tres mesos i la reclamació ha caducat. Vostès neguen i neguen que hagi caducat, com fa, segueix fent vostè avui aquí, quan, després de moltes reticències, fan públic l'expedient, resulta que vostès mateixos havien escrit allà que el període de caducitat era de tres mesos. Obliguen a la cap del Departament de Contractació a signar una diligència dient que no, que són vuit mesos, segons un acord que han pres vostès, després que s'hagi iniciat el procediment, i volen fer creure que això és un error material.

Un error material és dir que dos més dos són cinc, dir que el termini de resolució de la reclamació és de tres mesos, estant d'acord, per tant, amb la sentència del Tribunal Constitucional 68/2021, de fa tres anys, i la sentència del Tribunal Suprem 422/2024, i després de tot això, dia 19 de març, una vegada ja tenen a sobre una pressió brutal per intentar escapar de les sospites que indiquen que han deixat caducar l'expedient i han afavorit una empresa investigada per l'Audiència Nacional, i a la qual, des del Partit Socialista, com ja hem dit, de les Illes Balears, també hem denunciat, després de tot això, que vulguin canviar aquest termini, perquè passi a ser de vuit mesos, segons un acord que pren la Junta Consultiva de Contractació, amb posterioritat a l'inici del procediment i contrari a aquestes sentències, és, senzillament, escandalós.

Desistir, dos dies després, dia 21 de març, d'aquesta reclamació, és encara més escandalós, i un indicatiu molt clar que tenen fòbia que aquest expedient acabàs mai davant qualsevol jurista. Ara hi acabarà.

I acte seguit, el mateix dia, volen obrir una via de nul·litat del contracte dient que volen recuperar els màxims diners possibles. Nosaltres també i, per això, volem deixar clar que les dues vies, la reclamació de la qual vostès han desistit i el voler aconseguir que es declari la nul·litat del contracte, són objectius perfectament compatibles; i seguir endavant per les dues vies era la millor manera de maximitzar les possibilitats d'èxit a l'hora de recuperar els diners.

I voler fer creure que no es pot reclamar, perquè hi ha un certificat anterior de subministres, és, senzillament, d'aurora boreal; s'imaginem que un edifici cau i no es pot reclamar a la constructora perquè s'ha donat fe de l'entrega de les claus? No podrà reclamar vostè sobre el Verge del Toro si ja li han donat les claus?

Sr. Ureña, crec honestament que vostè no és conscient de l'ombra de sospita que aixeca. S'imagina que ara entràssim nosaltres a governar, demà mateix, i que el primer que fèssim fos desistir de la seva petició de nul·litat de contracte amb una empresa investigada per l'Audiència Nacional? S'imagina que, en canvi, ens inventàssim una altra reclamació pel que fos, què pensaria vostè? No creu que seria una estratègia un pèl arriscada? Què passa si no prospera la nul·litat del contracte? Perquè vostè, a més, coneix en profunditat aquesta contractació, perquè vostè treballava l'ib-salut i sap que el contracte està perfectament realitzat.

I si vostè estava tan segur que la reclamació no podia prosperar, però realment la seva intenció era recuperar el màxim de diners possible per a la comunitat autònoma, per què no seguir endavant i deixar que sigui un jutge que digui si la reclamació és o no procedent? O dir, miri: no, no passa res, ens ha caducat, però reobrirem l'expedient i seguirem exactament en el punt on ens havíem quedat i reclamarem de totes les maneres possible, per terra, mar i aire, reclamarem, si vol, per incompliment, però per tot l'import, si vol vostè, jo li compr. Per què no ho han fet això?

Tot això succeeix en un context on hi ha unes escoltes judicials que indiquen que l'empresa vol que la reclamació quedi en no-res i, per aconseguir-ho, esmenta Miguel Tellado, portaveu del Partit Popular al Congrés dels Diputats, un tal Alberto i una dona del PP de Balears de la corda de Pablo Casado. S'esmenta, per tant, gent que es troba per sobre de vostè a l'organigrama del Partit Popular, i el mateix jutge conclou que les pressions de l'empresa han tingut efecte i la reclamació no ha anat endavant.

Vostè diu que no hi ha hagut contacte amb l'ib-salut i les escoltes, efectivament, no apunten a l'ib-salut, apunten més amunt. Ha rebut, per tant, vostè pressions per tot el que ha fet i de l'empresa? Són pressions, o d'algú per sobre de vostè a l'organigrama del Govern o del Partit Popular? Vostè no té ganes de treure's aquestes sospites de sobre? No veu que tot el que ha fet en relació amb aquest expedient és un desastre rera l'altre, que només afavoreix l'empresa adjudicatària i que és fruit dels nervis que s'han instaurat al Consolat, després que tot aquest cas hagi sortit a la llum?

Perquè aquí, una de dues: o vostè és un absolut desastre gestionant, cosa que es veuria a tots els expedients de l'ib-salut, i per això li hem formulat preguntes abans, o amb aquest expedient ha passat alguna cosa que, tristament, és digna de ser investigada.

Res més, desitjam que tot el que ha passat s'aclareixi, tant en seu parlamentària, com en seu judicial, i esperem que aquesta manera de procedir no hagi afectat també la resta d'expedients que es tramiten a l'ib-salut.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Bona. Pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca té la paraula el Sr. Apesteguia. No, no en farà ús. D'acord.

Idò, ara passam al Grup Parlamentari Mixt, el Sr. Castells té un temps de cinc minuts.

Quan vostè vulgui.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Per començar, Sr. Ureña, vagi per endavant que res del que jo li deman implica cap exonericació respecte de la responsabilitat del que va fer l'anterior equip, perquè vostès juguen, estan acostumats a jugar el joc, no dic

que ho facin expressament, que és un *toma y daca* entre el PP i el PSOE, llavors, vostès, per defensar-se, diuen: no, i el que van fer vostès? És clar, però, jo el que li demano, per favor, és que vostè aquí compareix per donar explicacions sobre unes coses que faci vostè, el que han fet la resta també serà objecte d'examen, però vostè el que hauria de fer -bé, esperaré que la Sra. Gil deixi de parlar amb vostè, perquè així m'imagino, jo, almenys, no sé fer dues coses alhora, jo sempre li dic a la meua dona que jo sé no ho sé fer, no sé si vostè potser..., no, no, no ho dic per vostè, perquè, és clar, és que...-, bé, el que li deia és: res del que jo li pugui retreure, diguem, o li pugui exigir explicacions, exonera per a res l'anterior equip, el que li demano és que no em respongui les coses que nosaltres li demanem apel·lant el que va fer l'anterior equip, que tal vegada va fer les coses igual de bé o igual de malament que vostè, això ja ho veurem quan compareguin, perquè, escoltin, han comparegut a la comissió d'investigació el Sr. Negueruela, el Sr. Pons, la Sra. Armengol, la Sra. Patricia Gómez, és a dir que tot això els ho podem demanar a ells.

Per tant, vagi això per endavant.

Bé, jo li he fet una qüestió que vostè no m'ha respost, és a dir, vostès varen cometre un error, ho don per bo, es varen equivocar, varen posar tres mesos. La meua pregunta és: quan se'n varen adonar que s'havien equivocat? Quan se'n varen adonar que s'havien equivocat i que no eren tres mesos? Sabien que eren vuit mesos, però estaven tranquils, per tant és igual, el paper ho aguanta tot. No, és clar, és a dir, quan se'n varen adonar? El que dic jo és que, aparentment, se'n varen assabentar quan ja havien passat aquests tres mesos.

Aleshores, és clar, vostè no m'ha aclarit, vostè diu que no ho va demanar a la diligència a la Sra. Montserrat, d'acord, ho accepto; però, per tant, li pregunto: va ser aquesta senyora la que se'n va adonar que hi havia aquest error material? Fins que aquesta senyora, el 19 de març, signa això, vostès no són conscients que es varen equivocar? Aquest tema és molt rellevant, Sr. Ureña, vostè ha d'entendre la nostra perplexitat! Vostè ens hauria d'explicar quan se'n varen adonar que s'havien equivocat. I, jo dic que quin era el seu estat mental o el seu estat d'ànim o el seu estat d'esperit, i què varen decidir fer?

Perquè si aquesta diligència fos del dia 10 de gener, ho entendria, abans que passin els tres mesos, vostès s'adonen que s'han equivocat i ho corregeixen. Llavors, la meua pregunta és: tenint en compte que, per molt convençut que vostè estigués que el termini era de vuit mesos, vostè en va signar tres, per tant, vostè havia de ser conscient que hi havia hagut un error, quan varen decidir esmenar-lo? No varen fer res! Varen esperar que la Sra. Laura Montserrat li portés la diligència? És molt difícil d'entendre, vostè ha d'entendre la nostra perplexitat!

A mi m'ha deixat desconcertat que em diu: no, d'acord amb la Llei 3/2003, del règim jurídic de l'administració comunitat autònoma, el termini serien sis mesos, des del 24 d'agost. Ah, per tant, hauria caducat el 24 de febrer, però si estam en les mateixes! És a dir, vostè esgrimeix en la seva defensa que, segons la Llei del règim jurídic de l'administració de la comunitat autònoma, el termini era de sis mesos, des de la resolució, no des de la notificació a l'administrat. Com que la resolució d'inici de l'expedient va ser dia 24 d'agost, llavors,

segons vostè mateix, l'expedient hagués caducat el 24 de febrer. Per tant, ja no hi hagués hagut cap possibilitat de desistiment perquè l'expedient estaria caducat.

Això respecte dels temes que vostè ha incorporat a la seva resposta, però respecte de les qüestions que jo li he demanat abans, jo li he preguntat i vostè no m'ha contestat: com és que vostè va gosar signar un desistiment de 2,6 milions d'euros sense cap informe tècnic i jurídic? Sr. Ureña, vostè ha d'entendre la nostra perplexitat que vostè, per signar un desistiment de 2,6 milions d'euros es basti vostè sol, i per venir a comparèixer davant del Parlament vingui amb sis assessors! És molt difícil d'entendre!

Jo crec que vostè ens hauria d'explicar com s'atreveix a signar un desistiment de 2,6 milions d'euros sense cap informe tècnic i jurídic, ens ho hauria d'explicar.

Quant a la motivació, insistesc, a la resolució de desistiment no hi ha cap motivació, no s'hi esgrimeix cap motivació. Es parla de què podria haver-hi nul·litat, diu: "*Durante la tramitación se ha visto que podía haber nulidad*". Molt bé, però joestic d'acord amb el Sr. Bona en això, Sr. Ureña, la viabilitat de la nul·litat justifica un nou expedient, però no motiva el desistiment del primer, perquè no hi ha cap relació; és a dir que es pugui reclamar per nul·litat no és un motiu per desistir de la reclamació parcial. Per tant, això no és una motivació, això és un element nou que sorgeix, que jo els aplaudeixo que hagin vist que hi ha aquesta via...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Castells, hauria d'anar acabant.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

... -acab tot d'una, Sra. Presidenta- és a dir, els aplaudeixo que hagin vist que hi ha aquesta via, explotin-la, però això no justifica desistir del procediment del desistiment.

I li agrairia, si fos possible, a la seva segona intervenció, que respongués aquestes preguntes, que li he hagut de repetir per segona vegada, perquè la primera vegada no han obtingut resposta.

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Castells. Pel Grup Parlamentari Popular té la paraula la Sra. Isabel Borrás, per cinc minuts.

LA SRA. BORRÁS I ROSSELLÓ:

Gràcies, presidenta. Bueno, hemos contemplado que el Partido Socialista sigue queriendo desviar la atención del foco principal de la causa, en definitiva, del motivo por el que estamos aquí. Por el motivo que hay tres comisiones de investigación, en tres estamentos que son los más importantes para un ciudadano: este Parlament, el Congreso de los Diputados y el Senado, creo que es una cosa que nos debería hacer reflexionar, porque el motivo es la compra de las

mascarillas falsas por parte del Govern Armengol, el pago acelerado de 3,7 millones de euros por unas mascarillas falsas, por parte del Govern Armengol.

La falsificación de un certificado de idoneidad de unas mascarillas por parte del Govern Armengol.

Endosar el pago a Europa de unas mascarillas que ya se sabía que eran falsas, por parte del Govern Armengol.

De no reclamar 1,4 millones de mascarillas falsas y de dejarlas caducar durante tres años.

De ocultar documentos a la Oficina anticorrupción, por parte del Govern Armengol, a la Unidad de la Central Operativa de la Guardia Civil, a la Abogacía y al actual Govern.

Dejar caducar en un almacén 1,4 millones de mascarillas desde el 2022.

Y ahora intentar culpabilizar a este Govern.

Pero, sobre todo, mentir a la ciudadanía en el peor momento de la historia, de esta reciente historia, en un momento de una pandemia, en el momento que se moría la gente y alguien se lucraba. Estamos esperando desde hace 76 días que nos contesten quién llamó a quién, y la Sra. Armengol sigue sin contestar, el Partido Socialista sigue enfangando a este Parlamento.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Borrás. Sr. Ureña, tiene usted ahora un tiempo de quince minutos para contestar y hacer las contraréplicas.

EL SR. DIRECTOR GENERAL DEL SERVEI DE SALUT (Javier Ureña i Morales):

Muchas gracias. Sr. Bona, yo se lo repetiré todas las veces que haga falta, no hemos recibido indicaciones, no hemos recibido ninguna presión, no ha habido absolutamente ningún contacto con la trama y, de hecho, como máximo responsable del Servicio de Salud y como ciudadano, a mí me tranquilizaría muchísimo que sus compañeros de partido dijese lo mismo, muchísimo.

De hecho, dice si hay nervios entre las filas de los responsables de mi partido, hay una tranquilidad absoluta, absoluta, y, de hecho, a la persona que yo echo de menos hoy es a la exconsellera de Salud, que es la portavoz de su grupo en esta comisión, no entiendo por qué hoy no ha venido, pero, vamos, a lo mejor sí que eso se debe a alguna responsabilidad, a algunos nervios, o a alguna circunstancia que tampoco quieren explicar.

Ha vuelto a hablar de la sentencia del Tribunal Constitucional del 2021 y yo me volveré a referir a los pronunciamientos posteriores de la junta consultiva,

evidentemente. Y se ha vuelto a hablar de la sentencia del Tribunal Supremo, le invito a que revise los plazos de cómputo que utiliza el Tribunal Supremo, para calcular cuándo finaliza ese procedimiento de resolución parcial, porque ahí verá cómo el Tribunal Supremo cuenta el plazo desde que se toma el acuerdo de iniciar el procedimiento. Con lo cual, la fecha de referencia no es el día 17 de octubre, sino que es el 24 de agosto.

Dice que ustedes quieren recuperar todo el dinero, pero durante más de tres años no iniciaron ninguna reclamación, con lo cual ustedes dicen una cosa, pero luego vemos que hicieron otra. Y argumenta que..., no sé exactamente, no le he podido escuchar entero, si no reclamaríamos, en el caso de un edificio caído, si hay un certificado de correcta ejecución, exploraríamos todas las vías. A lo mejor usted solo reclamaría lo construido hasta la mitad del edificio, no sé cómo lo plantearían. Y, en todo caso, si quiere desistir de una reclamación, desistirían de una reclamación que hemos puesto en marcha nosotros, porque, como decía, ustedes no pusieron ninguna reclamación en marcha y las dos las hemos tenido que poner en marcha nosotros. Pero, en todo caso, parece que ustedes no van a entrar a gobernar, así que no vamos a correr ese riesgo.

Se ha atrevido a decir que el contrato está perfectamente hecho y para mí, y aquí lanzo la hipótesis, creo que puede ser uno de los peores contratos que se han suscrito en esta comunidad autónoma, 3.700.000 euros para unas mascarillas que no eran lo que tenían que ser, que nunca se han utilizado y que, además, un dinero que se ha transferido a una supuesta organización criminal. Yo no veo nada peor que eso, pero si para ustedes este es el criterio, este es el rango, ese es el criterio que tienen para decir lo que está perfectamente hecho, pues creo que está absolutamente todo dicho.

Y, en general, como les decía, tranquilidad absoluta, porque, por nuestra parte, no se preocupen en absoluto de nosotros. De hecho, yo, si me lo permite, hasta cierto empatizo con usted, porque su posición hoy me recuerda a la posición en la que me pone a mí el Partido Socialista. Yo también tengo tranquilidad absoluta con la denuncia, pero, la verdad, se lo digo sinceramente, hubiese preferido que no me la pusiesen, evidentemente. Y a usted hoy le hacen venir a comparecer aquí con este discurso, que sí le digo la verdad, y se lo digo porque yo respeto muchísimo su trayectoria académica y docente, prácticamente es como si se planta mañana en su Departamento de Física y dice que la tierra es plana y que la gravedad no existe, porque la verdad es que ha hecho unas afirmaciones que, a nivel jurídico, y con los datos que se conocen del expediente, la verdad que son absolutamente inverosímiles.

Sr. Castells, a ver si yo me puedo explicar. No soy yo el que detecta el error, digamos, y lo transmite, si me permite, en la posición jerárquica, de arriba abajo, es completamente al revés: se detecta en el Departamento de Contratación y a mí se me transmite. ¿Cómo se me transmite y cuándo? Yo, la verdad, es que no lo recuerdo. El 21 de febrero estábamos precisamente en Menorca, y creo que esto ya lo hemos comentado, el 21 de febrero visitábamos infraestructuras y estábamos, creo, que en el momento que nos llaman y nos informan de esta operación de la Audiencia Nacional, creo que estábamos en Alaior

visitando el solar para el nuevo centro de salud. La verdad que nos coge completamente fuera de juego, porque, como les decía, no tenemos ninguna información importante relevante de este expediente, ni las circunstancias que le acechan.

Al día siguiente teníamos una jornada absolutamente maratónica, en el Hospital Mateu Orfila, reuniones con jefes de servicio, de hora y media en hora y media, desde las ocho hasta las tres y media, sin ningún descanso.

Y yo intentaba darle la importancia y la atención que merecían a los jefes de servicio y a las supervisoras del hospital, mientras con el ordenador intentaba contestar los mensajes de toda la gente de Palma que me escribía. Pero, como le digo, bueno, ya saben, durante los siguientes días intentamos recopilar la información, intentamos informar. También cada vez que informo, sale mi Némesis detrás a dar una rueda de prensa o a dar una comparecencia para criticar y para enfangar absolutamente todo lo que decimos, con lo cual, para nosotros todo esto es muy nuevo y muy complejo. No obstante, hemos intentado recopilar la información y hemos intentado actuar de la manera más diligente posible.

Pero, como le digo, el tránsito de esta detección va de abajo arriba y no viceversa. De hecho, y es una cuestión personal, yo considero hace semanas que eso es un criterio técnico y que no tengo que entrar. Se considera desde el Departamento de Contratación que el plazo es de ocho meses y que eso es un error material. Yo lo suscribo, lo saben, y lo he dicho reiteradamente, que siempre voy a defender a los funcionarios del Servicio de Salud, a todos.

Sin embargo, cuando veo que va a ser una cuestión polémica, yo recabo toda la información, recabo los informes de la Junta Consultiva de Contratación, la sentencia del Tribunal Constitucional, la sentencia del Tribunal Supremo, nuestras dos resoluciones, absolutamente toda la información. Y, de hecho, me la llevo un fin de semana casa, aunque el Sr. Bona también se crea que yo los fines de semana no trabajo, y yo me paso la final de la Copa del Rey en casa, con la televisión delante, estudiándome informes hasta las dos de la mañana. Y, una vez repasada toda la información, una vez más veo que el criterio del Departamento de Contratación del Servicio de Salud es correcto y que yo me adhiero completamente, con toda la confianza del mundo, a ese criterio. Y, como le digo, evidentemente, por lo tanto, yo no tengo que ordenarlo a nadie que haga ninguna diligencia, porque es una decisión que se toma a nivel técnico para solventar este error que había en esta resolución.

Y, bueno, Sra. Borrás, ha apuntado a la existencia de tres comisiones de investigación, yo voy a aprovechar y les voy a dar una opinión de por qué hay comisiones de investigación, por lo menos la de aquí, del Parlamento, y es, y me lo van a permitir, porque hay un partido político que no está dando absolutamente ninguna explicación. Si el partido que gobernaba anteriormente en las Islas Baleares diese toda la información que tiene sobre el expediente y explicase las múltiples lagunas que hay en el expediente, yo entiendo que solo nos quedaría discutir cuáles son las responsabilidades políticas derivadas de este expediente, que en esto entiendo que

no nos pondríamos de acuerdo, pero, bueno, no pasa nada, y dejar que la justicia haga su trabajo.

Porque también aquí hay mucha gente que se está preocupando de la guerra del relato, pero a mí me da la sensación de que la realidad va por otro lado, aquí tenemos a la Audiencia Nacional trabajando, a la Fiscalía Europea trabajando y, bueno, ustedes dirán también al Juzgado número 7 de Instrucción de Palma, perfecto, les dejaremos trabajar, no hay ningún problema, tranquilidad absoluta. Yo confío plenamente en estos profesionales, y ya saben que con algunos de ellos he podido compartir tiempo las últimas semanas. Confianza absoluta en la justicia en este sentido, y entiendo que se esclarecerá.

Ahora, le repito lo que decía antes, como ciudadano y como representante del Servicio de Salud, entiendo que sería muy positivo para todos que se diesen muchas más explicaciones de las que se están dando desde diversos ámbitos.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gracias, Sr. Ureña. Acabat el debat, volem agrair la presència del Sr. Javier Ureña i Morales, director general de l'ib-salut i dels seus acompanyants.

I no havent-hi més assumptes a tractar, s'aixeca la sessió.



DIARI DE SESSIONS

DEL

PARLAMENT

DE LES

ILLES BALEARS
